

Programa Político



ESTE 30 Y 31 DE OCTUBRE VOTÁ POR

¡YA BASTA!



**Basta de genocidio
¡No al TLC con Israel!**

**Frente a la crisis,
8% para educación**

**Por transporte
estudiantil gratuito**



 **yabasta_cr**

 **yabastacr**

 **¡Ya Basta! UCR**

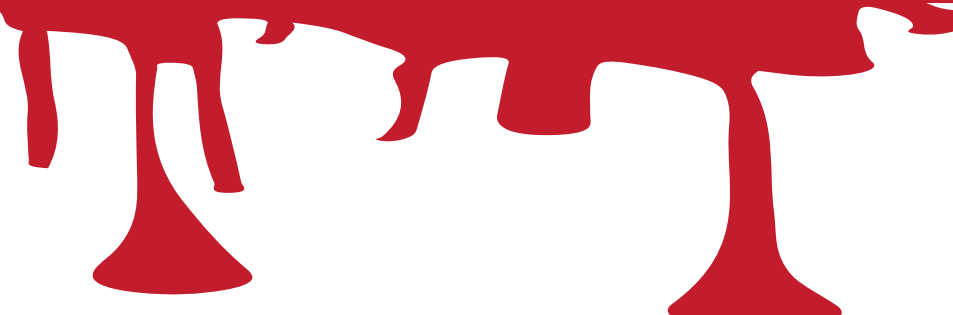


¡Ya Basta!



Programa **Político**





ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

6

PROPUESTAS PRINCIPALES

12

NO AL TLC CON EL ESTADO GENOCIDA
DE ISRAEL

13

FRENTE A LA CRISIS EDUCATIVA: 8% DEL
PIB PARA EDUCACIÓN

19

CONQUISTAR UN NUEVO DERECHO:
TRANSPORTE ESTUDIANTEL GRATUITO
EN TODO EL PAÍS

22

NO MÁS RECORTES AL FEES, POR
CONVENIOS QUINQUENALES Y EL 1.5%

25

BECAS QUE SE AJUSTEN AL COSTO DE
VIDA ¡YA!

29

PROPUESTAS POR ÁREAS

33

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE
RESIDENCIAS

34

MEJORES CONDICIONES PARA SEDES Y
RECINTOS REGIONALES

37



MODELO ESTUDIANTIL: UNIVERSIDAD
PARA LA CLASE TRABAJADORA

40

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL: CON
FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO
DESDE LAS BASES

44

LUCHAS FEMINISTAS Y LGBT+ 49

POR ABORTO LEGAL, SEGURO Y
GRATUITO

50

POR NI UNA MENOS

53

POR EDUCACIÓN SEXUAL LAICA,
CIENTÍFICA Y FEMINISTA

56

LUCHAS EN DDHH Y ECOLOGISTAS 60

VACÍOS INTERNOS EN LA UCR

61

MÁS DERECHOS PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

65

POR MAYOR Y MEJOR ATENCIÓN EN
SALUD MENTAL

67

DEFENDAMOS LA NATURALEZA FRENTE
A LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA

69

INTRODUCCIÓN

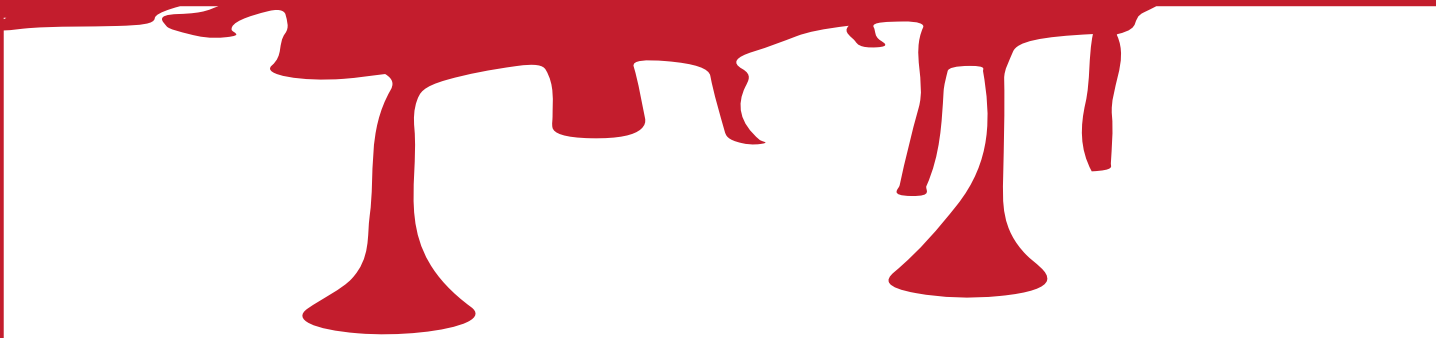


Coyuntura nacional: un país frágil, en crisis y sin rumbo

Los consensos surgidos posteriores a la Guerra Civil del 48 se desmoronan rápidamente en Costa Rica. Uno de ellos era la aspiración por diferenciarse de los países de la región bajo el engaño de ser la “Suiza centroamericana”, un país “democrático y pacífico” donde se invertía en salud y educación. A medida que la imagen de la tiquicia

del diálogo y los acuerdos por arriba se derrumba, le abre paso a un país donde el sicariato, el narco y la violencia son pan de cada día.

Hoy todo está en entredicho. Los ataques y recortes a la educación, la salud y otros derechos pone en duda la estabilidad social, los índices de violencia están alcanzando números preocupantes, la intromisión del narco en la vida social y política es indudable, y la economía, aunque estable, es frágil ante las disputas geopolíticas, los matonismos de Trump y sus políticas pro-



teccionistas imperialistas.

El mundo está ingresando en una nueva etapa histórica, con potenciales crisis, guerras, barbarie y ¿por qué no?, revoluciones. Este pequeño país no escapa a las dinámicas del globo y, por el contrario, es altamente vulnerable a ellas. Nuestras posiciones y propuestas tienen el interés de seguir impulsando las luchas de la clase trabajadora, la juventud y las mujeres, ante un capitalismo en crisis que no ofrece ningún futuro.

Economía: una estabilidad en riesgo

La situación económica del país es de una frágil estabilidad con riesgos potenciales. Las políticas de “responsabilidad fiscal” del tecnócrata neoliberal Rodrigo Chaves, han generado tasas de inflación bajas, estabilidad del dólar y una supuesta rebaja en la deuda pública y el déficit fiscal, a costa de recortes dramáticos en sectores sociales como la educación, cultura y salud; una estabilidad económica a costa de los sectores sociales más empobrecidos.

El gobierno de Chaves celebra haber recibido una economía en crisis y dejarla como una de las más “robustas de la región”. La deuda del gobierno central pasó de un 67,6% del PIB en 2021,

a 59,7% del PIB en 2024, pero durante ese mismo periodo la deuda aumentó un 8% en términos nominales (de 32,7 billones de colones a 35,3 billones de colones).

Sin embargo, las dinámicas políticas y económicas internacionales, así como nuestra dependencia a la deuda externa, nos hacen altamente vulnerables a futuras crisis, depresiones o recesiones, que podrían impactar las tasas de interés, la relación del colón/dólar, o incluso la reducción del crecimiento económico por las imposiciones proteccionistas del imperialismo norteamericano.

Aunque traten de vendernos que la economía está bien, por abajo la cosa no anda nada bien, pues las finanzas de los sectores trabajadores, populares y vulnerables sigue empeorando. Ejemplo de ello es la dramática caída de la fuerza laboral en el último año con 105.000 personas menos, dispuestas a trabajar, que suma a las 80 mil personas que perdieron su empleo y las 25 mil personas desempleadas que se cansaron de seguir buscando empleo. Sumado a esto, los salarios del sector público son hoy el 90% de lo que eran antes de la pandemia, lo que deteriora sus condiciones de vida, su capacidad de consumo y su acceso a servicios.

Por su parte, sectores importantes de



la economía nacional no andan bien, como lo es el turismo y la producción agrícola. En el caso del primero, la visitación turística ha caído 2,3% comparado al año anterior, y el gasto de los turistas se ha reducido en \$71 millones menos que en 2024. También, la producción agrícola se está desmantelando para favorecer negocios privados de los importadores, como los de arroz, y lo que atenta contra nuestra seguridad y soberanía alimentaria. En comparación con el 2021, el área cultivada se ha reducido en 30%, el nivel más bajo desde 1989. La contracara de la “estabilidad económica” es la crisis social

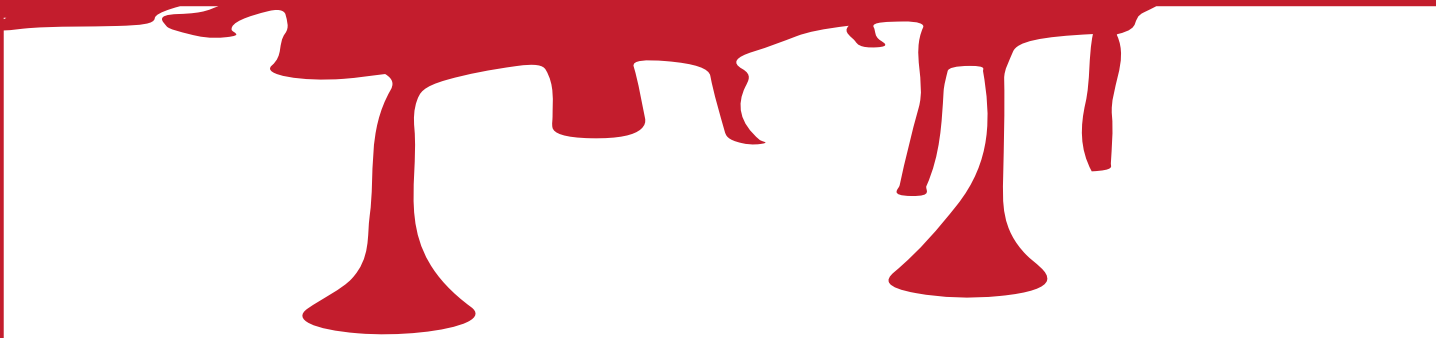
El país atraviesa una crisis social sobre todo en aspectos como la educación, la inseguridad, el transporte público, la violencia de género, el autoritarismo y la represión social, el empleo, las pensiones, entre otros. La contracara de la “frágil estabilidad económica” es precisamente el malestar social de las mayorías, pues cuando la derecha ataca los derechos, no busca “reducir el gasto” sino arrancar las conquistas de décadas pasadas, como salud, educación o pensiones, para aumentar las ganancias del capital.

La expresión más feroz de la crisis social es la violencia cotidiana: asesinos,

sicariato, enfrentamientos entre pandillas, balaceras y disputas narco. El capitalismo de hoy no ofrece ningún futuro a la juventud, menos cuando recortan las becas estudiantiles, los comedores o el transporte escolar. Ante esta incertidumbre, la juventud opta por el dinero rápido, la admiración por los narcos, el lujo, la cosificación de las mujeres, las actividades ilícitas, el trabajo rápido por internet y la violencia como modo de vida.

Frente a esta realidad, el gobierno derechista de Chaves, ha impulsado una política que prioriza la “responsabilidad fiscal” sobre el bienestar social lo que resulta en una draconiana reducción de la inversión social, que pasó de 12,8% del PIB en 2020 a un 9,3% del PIB en 2025. Uno de los sectores más recortados por esta política es educación con la menor inversión educativa desde 1980, pues hoy tenemos un 4,9% del PIB mientras que hace 45 años era de 5,3% del PIB.

Frente a la crisis social la juventud, cada vez más precarizada, es forzada a abandonar el sistema educativo para integrar bandas y pandillas donde encuentran una salida económica, de “estatus” y reconocimiento social. Así le vende el capitalismo, proyectos de vida a los sectores sociales más



excluidos; podés aspirar a ser alguien en el mundo narco. Es urgente recuperar la inversión en educación ante la crisis que estamos viviendo. De lo contrario, los alarmantes números de asesinatos récords en los últimos tres años, serán cada vez más, la vida cotidiana nacional.

Para empeorar, la juventud sufre el desempleo y la precarización del trabajo y de la vida; “la cantidad de jóvenes fuera de la Fuerza de Trabajo ascendió a un 65%, es decir, prácticamente dos de cada tres están fuera del mercado laboral”. En la población de 15 a 24 años el desempleo alcanza el 20,4%, lo que triplica el promedio nacional, y nos hace el segundo país con más jóvenes desempleados de América Latina. Las personas jóvenes están siendo expulsadas y/o marginalizadas del mercado laboral, evidente además, en el 27,9% de ni-ni, es decir, quienes no estudian ni trabajan, el segundo promedio más alto de la OCDE y que duplica el promedio de este grupo de países (13,8%).

No hay que naturalizar o normalizar el desempleo, la precariedad laboral y las actividades al margen de la ley para nuestra juventud, pues les condena a las nuevas generaciones a vivir en la pobreza, la miseria y la violencia, mientras los millonarios cap-

italistas se llenan los bolsillos, y nos engañan con datos sobre “mejoras en el empleo”, cuando en realidad nos pulverizan el futuro.

El movimiento estudiantil debe irrumpir en la escena política

El capitalismo está sufriendo una serie de crisis estructurales a nivel internacional, como son la crisis económica, la de salubridad, la ecológica, las migratorias, las alimentarias, las humanitarias, las cadenas de suministros, la ruptura del orden internacional y la posibilidad de más choques y enfrentamientos entre potencias globales. El capitalismo del siglo XXI no ofrece ningún futuro, pero sí nos lleva a la guerra, al desastre climático, a las pandemias, los genocidios, la violencia y más problemas.

El mundo está terminando una etapa histórica y comenzando otra, que no sabemos donde va a terminar, pero que debemos forzar a que termine en favor de la clase trabajadora y los sectores explotados y oprimidos, no de una u otra potencia imperialista. Esto hace cada vez más necesario, que el joven e inexperto movimiento estudiantil en Costa Rica, empiece a hacer sus primeras armas de lucha, a construir su conciencia colectiva, sus



métodos de organización y sus acciones de protesta, resistencia y solidaridad.

En Costa Rica tenemos a un gobierno de derecha y conservador, que en lo económico ha impulsado la política recortista y neoliberal, que iniciaron y continuaron los liberacionistas del PLN o los progresistas del PAC cuando fueron gobiernos. En lo social, ha profundizado todos los recortes, ha negado derechos sociales conquistados y pretende hacernos retroceder en otros tantos. Esto coloca al estudiante como un actor potencialmente opositor desde las calles a este o a cualquier gobierno, que prosiga con este tipo de políticas.

Los partidos de la derecha además, están todos en crisis. El PLN ni siquiera ha podido garantizar su asamblea de San Ramón, lo que amenaza su deuda política, y su candidato no ha logrado aglutinar realmente una base simpaticizante y, por el contrario, se pelea con los viejos mandos del partido. El PAC es tan débil, que ni siquiera han podido consolidar un partido juvenil en la UCR, una escuela de formación política fundamental para las bases de los partidos nacionales.

En el caso de la “izquierda oficial” del Frente Amplio tampoco anda bien,

pues se ha dedicado más a hacerse potable para el votante conservador y capitalista, que a impulsar una real agenda de izquierda. Incluso han “coqueteado” con hacer parte de un frente con partidos de la derecha o han expresado haberse hecho hacia “el centro político” debido a que el gobierno es muy de derecha, una posición que se adapta dependiendo de lo que haga la derecha y no de las necesidades e intereses de los sectores populares.

Más grave aún, son las posturas que últimamente ha expresado el candidato Ariel Robles, quien afirma que en un gobierno suyo no pondrían impuestos a las zonas francas, cuando éste es uno de los países más desiguales del mundo y sin duda necesitamos una reforma fiscal progresiva, que grave a los sectores de la economía más dinámicos, como son las zonas francas, las piñeras o el megaturismo. El desbarranque se completó cuando afirmó que el aborto “no es una discusión actual”, o que no se iba a posicionar sobre el tema porque “él es hombre”.

De esta manera, el FA es un partido liberal-social, no de izquierda, pues ni enfrenta a los capitalistas ni tampoco a los conservadores de todo tipo. Por



el contrario, se adapta, lava su discurso con cloro y se hace potable a los ojos del empresariado, que busca partido ante tanta debacle entre las élites que nos han gobernado.

Desde nuestra posición política, la izquierda debe impulsar las luchas desde abajo, contra la clase capitalista y por el desarrollo de la conciencia entre los sectores explotados y oprimidos: la clase trabajadora, la juventud estudiantil y las mujeres y diversidades. Esto debe hacerse con total independencia de los partidos de la derecha, los conservadores o el gran empresariado, todo al contrario de lo que hace el FA.

Ofrecemos al estudiantado hacer parte de nuestra organización estudiantil ¡Ya Basta! quienes hacemos parte de la corriente internacional Socialismo o Barbarie junto a nuestras organizaciones hermanas de Argentina, Brasil y Francia. Te invitamos a formar parte de nuestras luchas, por un mundo sobre otras bases sociales, contra el capitalismo explotador, el patriarcado, el colonialismo extractivista y por la conquista de nuestros derechos en este siglo XXI.

Referencias:

1. Semanario Universidad. <https://semanariouniversidad.com/pais/deuda-publica-crecio-8-durante-gobierno-de-rodri-go-chaves/>
2. Columbia. <https://columbia.co.cr/cor-rales-en-un-ano-se-destruyeron-81-000-empleos-netos-en-costa-rica/>
3. Semanario Universidad. <https://semanariouniversidad.com/pais/salarios-reales-del-sector-publico-estan-un-105-por-debajo-de-los-ingresos-prepandemia/>
4. Semanario Universidad. <https://semanariouniversidad.com/pais/sector-agricola-cae-a-sus-niveles-mas-bajos-con-el-actual-gobierno/>
5. Semanario Universidad. <https://semanariouniversidad.com/pais/inversion-social-se-hunde-en-2025-al-caer-al-93-del-pib-en-gobierno-de-chaves/>
6. Semanario Universidad. <https://semanariouniversidad.com/pais/inversion-social-se-hunde-en-2025-al-caer-al-93-del-pib-en-gobierno-de-chaves/>
7. Semanario Unieversidad. <https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-enfrenta-la-mayor-reduccion-en-inversion-educativa-de-los-ultimos-40-anos/>
8. Semanario Univerisdad. <https://semanariouniversidad.com/pais/jovenes-fuera-de-fuerza-laboral-en-costa-rica-ascienden-v>

PROPUESTAS PRINCIPALES





NO AL TLC CON EL ESTADO GENOCIDA DE ISRAEL

Desde hace dos años Israel intensificó su ofensiva contra el pueblo palestino, en lo que internacionalmente se ha reconocido como un genocidio. Los sionistas justificaron sus brutalidades a raíz de la incursión de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, llenando de mentiras y distorsiones sus narrativas para legitimar lo que estaban por ejecutar. La opinión pública internacional se colocó del lado sionista en los primeros meses, pero después de dos años de exterminio, el mundo se ha dado cuenta de que Israel lo que busca es barrer a Palestina del mapa, una política de limpieza étnica, vigente desde 1948 con la creación del Estado israelí.

Un genocidio que se transmite en cada teléfono celular del mundo, deja sin dudas a quien vea las imágenes de destrucción casi total de Gaza, producto de los bombardeos constantes a objetivos civiles como hospitales, escuelas, universidades,

museos, bibliotecas, sitios de entretenimiento, zonas de cultivo o comerciales, etc. La narrativa era que iban por Hamás, pero en realidad fueron por todo el pueblo. Si no, no se entiende por qué tanta destrucción, o por qué bloquear el acceso a alimentos, agua y medicinas durante 222 días seguidos, mientras cientos de camiones con ayuda humanitaria esperan ingresar.

Pero la opinión pública internacional cambió de bando, en tanto fue quedando cada vez más claro la barbarie internacional que significa este atentado contra la vida de un pueblo oprimido. Las movilizaciones de solidaridad con Palestina en todo el mundo han presionado a gobiernos, embajadas y organismos internacionales para que tomen acciones contra el genocida. Algunos gobiernos han cortado relaciones con el Estado sionista, han cortado el comercio de armas, o han reconocido formalmente al “Estado palestino”. Las flotillas por el Mar Mediterráneo que intentan romper el bloqueo



para llevar ayuda humanitaria, han contribuido a esclarecer las intenciones de Israel y han motivado a millones a manifestarse por todo el mundo.

Las acusaciones de los genocidas contra quienes criticamos su política de exterminio como “antisemitas”, ya no calan en la opinión pública, porque ha quedado en evidencia que la política colonial se esconde bajo argumentos falsos, tergiversados, mentirosos. Los horrores que sufrió el pueblo judío bajo el nazismo ya no alcanzan para seguir justificando la destrucción de Gaza y su pueblo, porque ha quedado claro que lo más cercano al fascismo en este siglo XXI, es precisamente el sionismo terrorista.

Nuestra postura es la defensa incondicional del pueblo oprimido contra el opresor, sin importar sus direcciones o su gobierno. No somos partidarios de Hamás, una organización fundamentalista religiosa islámica, conservadora e incluso neoliberal, con quienes no compartimos ni su política, ni su métodos. Sin embargo, comprendemos que después de casi 8 décadas de expulsión de palestinos de sus tierras originarias, la resistencia contra la agresión es legítima y necesaria para sobrevivir, por lo cual, Hamás es el resultado obvio de la opresión sionista contra el pueblo árabe-palestino.

El resultado del genocidio hasta hoy es escalofriante: 67 mil víctimas mortales,

entre los que cuentan 20 mil niños, 1670 profesionales médicos y 254 periodistas. 9.500 desaparecidos, muchos seguramente permanecen dentro de los escombros. 170 mil personas heridas y lesionadas. 2,1 millones de palestinos desplazados; 90% de los edificios destruidos, en particular los residenciales. Hay quienes hablan de “domicilio” pues el sionismo quiere quitarle a los palestinos todo lugar para vivir.

Israel bombardeó 136 veces la zona de Al-Mawasi, una “zona humanitaria segura”, definida por el mismo ocupante. 38 hospitales y 96 centros de salud han sido destruidos; 293 centros de refugio han sido atacados. El genocida Estado de Israel, ha impedido el ingreso de ayuda humanitaria por las fronteras de Gaza, bloqueando 120.000 camiones con insumos e intervino en la llegada a la costa a las flotillas marítimas, durante 222 días seguidos. Todos los crímenes de guerra los ha cometido Israel en estos dos años de genocidio. El sionismo forja así, un proyecto colonial, de limpieza étnica y racista.

¿Un TLC con los genocidas? No, gracias

En marzo de 2023, los gobiernos de Costa Rica e Israel firmaron un memorando para negociar un TLC entre ambos países. Más que un socio



comercial de peso para el país, lo que se esconde detrás del acuerdo, es el intento por legitimar el genocidio israelí contra el pueblo palestino.

De 2018 a 2023, Costa Rica exportó \$71.08 millones, e importó en el mismo periodo \$267.6 millones, una balanza comercial negativa para el país centroamericano. Los productos de exportación son mayoritariamente café y piña, y minoritariamente algunos implementos tecnológicos. Entre los bienes importados destacan los agroquímicos, circuitos integrados y materiales eléctricos.

¿Valen estos números lo suficiente para que nos hagamos de la vista gorda sobre lo que pasa en Gaza y firmemos un TLC con el sionismo? Para nada, no hay dinero que valga más que las vidas de un pueblo oprimido. Los intentos por aprobar este TLC solo muestran que para el gobierno de Chaves y buena parte de la burguesía nacional que estaría por aprobarlo, valen más sus negocios privados que la vida. Así funcionan los capitalistas, si hay ganancias de por medio, hasta con el peor nazi del siglo XXI se juntan.

Es tan repudiable y vergonzoso estar negociando con el sionismo asesino, que podemos afirmar que el gobierno de Chaves está siendo cómplice de

Israel. Incluso, el hermetismo con el que han estado negociando, al punto de tratar el tema como un “secreto de Estado”, evidencia el descaro y los intentos por evitar las críticas y señalamientos contra el mismo.

Por el contrario, Costa Rica debe asumir una posición de denuncia permanente contra los crímenes cometidos por Israel, debe presionar políticamente para que se termine la masacre, y debe romper todo tipo de relaciones diplomáticas, comerciales, académicas y de otro tipo con los sionistas, con el fin de deslegitimar su política y presionar para que se acabe el genocidio.

Es semanas recientes, el grupo “Coalición Palestina” lanzó la campaña de firmas contra el TLC con Israel, a la cual nos sumamos. ¡Ya Basta! ha sido la única organización partidaria estudiantil que se ha sumado a la campaña de firmas, y entregamos 600 firmas el pasado 27 de septiembre en la gran marcha por Palestina en Costa Rica. Hasta ese momento se habían recolectado cerca de 6 mil firmas en todo el país, lo que quiere decir que aportamos con el 10% de las firmas totales hasta ese momento.

Necesitamos que la FEUCR sea una herramienta de lucha estudiantil



para organizarnos y continuar la lucha contra el TLC con Israel, y presione al gobierno de Costa Rica para romper todo tipo de relación con los genocidas. No merecen acuerdos comerciales ni legitimidad, merecen juicio y castigo por sus crímenes contra la humanidad.

Relaciones de universidades costarricenses con Israel

En cuanto a las universidades públicas hay que destacar que hay un historial de acuerdos académicos con universidades israelíes e incluso algunos se mantienen vigentes con el ente sionista. Según, Gamboa (2024), ante una consulta realizada a las 5 universidades sobre esto encontró que, la UCR tiene dos convenios ya finalizados durante la gestión de Henning Jensen, uno de 2016 a 2021 para el “fortalecimiento de los lazos académicos y culturales” y otro de 2017 a 2022 para “facilitar estancias cortas de investigación”.

Asimismo, señala que la UNA mantiene aún dos convenios vigentes, uno desde 1990 y de prórroga automática por 5 años, con el fin de “intercambiar experiencias docentes e investigativas” y “promover el reconocimiento entre ambos

países”. Otro convenio sigue activo desde 1992, también de renovación automática. En el caso de la UTN tiene un memorando de entendimiento con varias áreas de cooperación como formación lingüística, intercambio de estudiantes, educación a distancia, etc.

Ninguna universidad pública, ni institución, ni gobierno local deberían mantener relaciones con el Estado ilegítimo de Israel, una tarea política, ética y humanitaria para detener la barbarie genocida. No serán nuestra universidad, pero se costean con recursos públicos que son de todo el pueblo que habita este país. La FEUCR en conjunto con otras organizaciones estudiantiles, asociaciones o federaciones, debe impulsar en toda instancia, por la ruptura de todo convenio y relación con el estado terrorista de Israel.

No ha terminado la barbarie con el “acuerdo de paz” de Trump

Queremos alertar que el plan para Gaza presentado por Trump y Netanyahu no es un alto al fuego, no es un acuerdo de paz y no es un plan para detener la colonización. Es un ultimátum para obligar al pueblo palestino: “o se dejan esclavizar o tenemos vía libre para



masacrarlos”. Un acuerdo de paz se alcanza con la negociación entre las partes en disputa, y el pueblo palestino no fue consultado, un acuerdo que venga escrita por el sionismo y su principal aliado no trae nada en lo que se pueda confiar.

El plan de Trump para Gaza es expulsar a todos sus habitantes originarios para construir un resort turístico de lujo. Al día siguiente de anunciado el “plan de paz”, Netanyahu asesinó a 45 palestinos. Hoy ya en vigor el acuerdo, Israel sigue disparando, matando y limitando el ingreso de la ayuda humanitaria, pues el plan obligaría a Israel a dejar ingresar 600 camiones por día, la cantidad mínima necesaria para detener la hambruna, sin embargo, los sionistas solo están permitiendo el ingreso de la mitad. El Estado genocida actúa con total impunidad, nunca respeta los acuerdos y no hay ninguna sanción por sus crímenes, ya lo han hecho antes, lo pueden volver a hacer ahora. No es un acuerdo cuando no se reconoce el problema central a resolver: que Israel está cometiendo un genocidio a gran escala en Gaza, y, por el contrario, parten de que el problema es que Gaza está muy “radicalizada”. No es un acuerdo, sino una imposición, cuando obligas

a las víctimas a entregar las armas, mientras el agresor ocupante permanece armado hasta los dientes. Nos buscan respetar la existencia de Palestina, pretenden continuar sus planes de colonización y despojo, con el pueblo palestino como mano de obra barata o esclavizada para sus negocios millonarios. No buscan reconocer el derecho a la autodeterminación del pueblo oprimido, buscan imponer una dictadura controlada por Trump bajo la mentira de un “gobierno transitorio tecnocrático y apolítico”, como si en serio pudiera existir un gobierno “apolítico”.

Claramente, comprendemos la desesperación, el cansancio, el sufrimiento, el trauma colectivo por el que está pasando Palestina, que no les deja otra opción que aceptar el falso acuerdo de Trump. Pero no podemos dejar de alertar que el “plan” es de sometimiento total, de saqueo, colonización y esclavitud. No hay que quitar la mirada de Gaza, no hay que dejar de presionar, no hay que dejar de estar alertas, hasta que Palestina por fin pueda vivir libre desde el río hasta el mar.

DESDE ¡YA BASTA! PROPONEMOS

1. Por una Semana U dedicada a la lucha palestina, que todo artista o participante firme previamente una carta de apoyo a la lucha palestina.

2. Que la FEUCR sea parte activa de la campaña nacional contra el TLC con Israel, sostenga recolectas de firmas y participe de los espacios de organización, debate, convocatorias y luchas.

3. Que la FEUCR sea un actor político para impulsar la ruptura de todo tipo de relación con el Estado genocida, sus empresas o instituciones, ya sea presionando a gobiernos locales, instituciones públicas, universidades o el mismo gobierno nacional.

4. Que la FEUCR apoye la presión contra el gobierno para exigir juicio y castigo contra los genocidas en las cortes internacionales.

5. Apoyar los envíos de ayuda humanitaria para la alimentación y reconstrucción de las ciudades palestinas de Gaza, más no los planes de reurbanización del trumpismo y el sionismo.

6. Impulsar una campaña en conjunto con asociaciones estudiantiles, para que las escuelas, facultades y consejo universitario se pronuncien contra el genocidio clara y contundentemente



FRENTE A LA CRISIS EDUCATIVA: 8% DEL PIB PARA EDUCACIÓN

La educación es un pilar esencial para el desarrollo de una sociedad, y en Costa Rica ha sido un derecho fundamental conquistado con huelgas, luchas y movilizaciones. La educación es obligatoria y financiada por el Estado desde mediados del siglo pasado, y es una herramienta significativa para el bienestar social, pues gracias a esta la clase trabajadora tiene la posibilidad de mejorar sus habilidades, conocimientos y sensibilidad para el empleo. Sin embargo, últimamente se ha observado una tendencia de parte de los últimos gobiernos, para disminuir la inversión dirigida a la educación, ignorando lo dicho en la Constitución Política que establece un 8% del PIB para la educación. En el 2017 la inversión en educación respecto al PIB, alcanzó su punto más alto en la historia del país, llegando a ser un 7,5% del PIB, pero en los años siguientes, disminuye hasta llegar a un 4,9% en el 2024. Este año tenemos el peor presupuesto educativo en 45 años, pues para 1980 alcanzaba el 5,3% del PIB.

Una de las razones por las cuales esta situación se ha desarrollado es por la priorización de la regla fiscal sobre la norma constitucional, ya que los gobiernos enemigos de la educación han decidido recortar la inversión a niveles muy bajos, se estima que para el próximo año, la inversión en educación sea un 4,6% del PIB.

El gobierno no solo ha incumplido con el 8%, reduciendo el presupuesto del MEP para primaria y secundaria, debido a las imposiciones recortistas de la regla fiscal. En el caso de primaria, de 2018 a 2023 el presupuesto se ha reducido en 14%. El Poder Ejecutivo es el principal responsable de que la inversión educativa se haya estancado e incluso retrocedido.

El sistema educativo público recibe menos recursos financieros de parte del Estado lo que complica estudiar y fomenta la deserción. Por ejemplo, han recortado 100 mil Becas Avancemos, lo que perjudica a los estudiantes en situaciones vulnerables; los servicios de comedores escolares y transporte estudiantil se han recortado en 19% entre el 2019 y el 2024, lo que afecta al



estudiantado que vive más alejado de los centros educativos o a quienes más se les complica movilizarse.

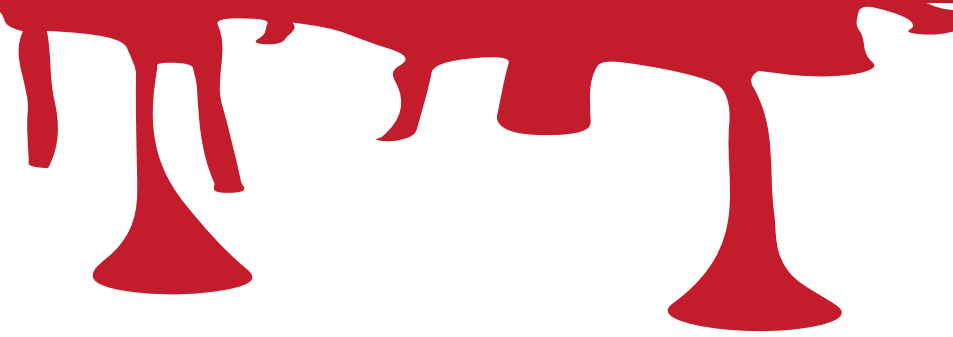
De esta forma las instituciones de educación tienen cada vez menos para satisfacer las necesidades de la juventud estudiantil. Aquellos estudiantes que dependen de las becas no podrán seguir sus estudios por los recortes, y las instituciones educativas de los sectores más alejados y vulnerables quedarán sin el apoyo financiero necesario. Esto último causa que la infraestructura y los ambientes de aprendizaje de los centros educativos también están en un estado de deterioro, ya que en Informe del Estado de la Educación menciona que se reportan 887 órdenes sanitarias de diferentes centros educativos desde diciembre del 2024.

Las consecuencias de estos recortes se observan en los resultados de las pruebas PISA, las cuales muestran que el desempeño educativo en 2022 es de los más bajos en décadas, posicionando a Costa Rica entre los países con más rezagos en educación. Hay un atraso educativo muy profundo, lo que se refleja en el X Informe del Estado de la Educación, pues menciona que el estudiantado de último año de secundaria no han desarrollado habilidades básicas (que en teoría ya deberían dominar), como la comprensión de lectura, resolución de problemas matemáticos en contextos reales, etc.

Se dice también en el mismo informe que las pruebas nacionales estandarizadas realizadas por el MEP están mal diseñadas, debido a que sus preguntas son muy básicas y no exigentes en conocimientos complejos o pensamiento crítico, lo cual causa que les estudiantes terminen sus estudios con pocas habilidades y una formación académica deficiente. La educación pública en todos sus niveles se encuentra en crisis. Desde 2017 en adelante, el presupuesto se ha ido recortando. El gobierno de Rodrigo Chaves y la ministra Katharina Muller profundizó los ataques a este derecho. Para solventar la crisis educativa y alcanzar el 8% del PIB para la educación pública hace falta cuestionar a la ganancia privada, pues transitamos una crisis del sistema capitalista, en donde se privatiza la ganancia y se socializa la pérdida. Hay actividades económicas muy lucrativas, como las zonas francas y las piñeras, que se benefician de los conocimientos y habilidades que genera el sistema educativo público, pero tienen grandes privilegios fiscales para no pagar impuestos.

DESDE ¡YA BASTA! PROPONEMOS

1. Por un proyecto de ley para que se cumpla con el 8% del PIB para educación, en máximo 8 años.
2. Poner los recursos de la FEUCR en función de una gran campaña estudiantil para reconquistar el 8% para educación.
3. Impuestos directos a las ganancias de zonas francas para financiar la educación.
4. Que se devuelvan los recursos a transporte estudiantil, comedores escolares y becas que se han recortado en los últimos años.
5. Derogatoria de la regla fiscal.



CONQUISTAR UN NUEVO DERECHO: TRANSPORTE ESTUDIANTIL GRATUITO EN TODO EL PAÍS

El transporte público se encuentra en emergencia nacional. Todos los días sufrimos las presas eternas, las rutas y frecuencias insuficientes, buses en mal estado, sucios, con malos olores, ruidosos, viejos o los que se queman en vía pública. Se vive el hacinamiento, la inseguridad, las goteras y el alto costo del pasaje con servicios de pésima calidad. Un transporte que no tiene nada de público y ni siquiera subsidios para abaratar costos (con excepción de las personas adultas mayores con el Programa Ciudadano de Oro). El modelo de concesión del transporte prioriza las ganancias privadas de las autobuseras, antes que las necesidades de movilidad de la clase trabajadora, el estudiantado y la población en general. Por eso son un lastre para la modernización, la implementación de pago electrónico, o la

sectorización para evitar siempre tener que ir al centro.

Hoy tenemos 10 veces más vehículos que hace 45 años con casi la misma infraestructura vial. Del 2000 al 2025 el transporte público ha tenido una caída del 40% de pasajeros. El congestionamiento vial provoca un altísimo costo económico por tiempo perdido y gasto en combustibles, que para el 2018 se calculó en 4% del PIB.

En todo el país, de 500 rutas existentes hay 103 sin servicio: un 20% no están funcionando. Hay un faltante de 1.500 chóferes de autobús, una crisis que puede deberse a las condiciones hiperprecarizadas, los bajos salarios, la sobreexplotación y el mal trato que reciben la mayoría de chóferes por parte de las patronales autobuseras.

Para el caso específico de la UCR, este mismo problema afecta varios servicios de los que antes se gozaba, pues hay cierre de algunas rutas externas, hay



reducción en la frecuencia de otras rutas y también hay recortes en el servicio intersecciones. Todo lo cual afecta la capacidad y movilidad de las personas trabajadoras de la U, que por ejemplo dan clases en varias sedes, o del mismo estudiantado, que puede llevar cursos en una u otra sede, pero si el transporte se complica, puede provocar un limitante para acceder al derecho a estudiar.

Para 2022, el MEP asignó un presupuesto de 44.279 millones de colones al transporte estudiantil, mientras que para 2023 lo redujo a 31.286 millones de colones, es decir 12.993 millones de colones menos (-29.34%), una política que afecta principalmente a estudiantes de zonas alejadas de los centros educativos y fomenta el abandono escolar y la exclusión por parte del gobierno enemigo de la educación.

En contraste con otros países de la región, Costa Rica no subsidia el transporte, sino que todo sale del cobro de los pasajes al usuario. Esto lo hace un servicio caro, donde la gente prefiere pagar un poco más en un Uber que esperar al bus que es incómodo, feo, lento, inseguro y me deja lejos de la casa. Un país como Chile destina \$1.000 millones anuales a su sistema RED, mientras Colombia invierte \$1.200 millones en ciudades como Bogotá o Medellín. Argentina asigna \$2.000 millones para trenes, subtes y buses, mientras que México alrededor de \$1.500 millones.

Urge atender la crisis del transporte

público, y el estudiantado debe ser un actor importante para conocer sus necesidades de movilidad, pues una buena parte de la población nacional es estudiante. Claramente, no va a ser el Directorio de la FEUCR quien resuelva ni tenga la propuesta mágica para solventar la crisis, pero sí debe ser partícipe de la discusión nacional.

También debe exigir y velar porque se cumpla el derecho a un transporte público digno, de calidad y barato, pues todo el estudiantado es usuario de los servicios y su desmejora afecta también el derecho al estudio. La movilidad es un derecho básico que garantiza el acceso a otros derechos como educación, salud o trabajo y, por lo tanto, es interés estudiantil velar por este derecho.

Recientemente, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) realizó un informe para la modernización del transporte público, en el que una de sus propuestas es destinar entre 0,5% y 1,5% del PIB anual para darle un financiamiento estable al sector, una importante propuesta que nos hace pensar que el estudiantado de Costa Rica debe aprender de la experiencia de otros países, y subsidiar el transporte para todo el estudiantado de todo el país.

DESDE ¡YA BASTA! PROPONEMOS

1. Una gran campaña estudiantil para conquistar un nuevo derecho: 0,5% del PIB para transporte estudiantil gratuito en todo el país.
2. Mayor inversión en el transporte interno para giras, TCU's, acción social y bus interno.
3. Nuevos convenios para la prestación de las rutas externas cerradas.
4. Mayor frecuencia de rutas inter-sedes que se han recortado y de buses externos en zonas de las sedes y recintos regionales.
5. Mayor inversión en el transporte interno de la UCR para giras, acción social, TCU's y el bus interno en la sede Rodrigo Facio.



NO MÁS RECORTES AL FEES: POR CONVENIOS QUINQUENALES Y EL 1,5%

El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) es el dinero otorgado por el Estado a las universidades públicas para su funcionamiento. Se negocia en la Comisión de Enlace integrada por representantes del gobierno, las cinco rectorías y, desde 2019, una representación estudiantil. Es la principal fuente de financiamiento de la educación superior pública y se distribuye entre las universidades (UCR, UNA, TEC, UNED y UTN) mediante el CONARE.

Por Constitución, los montos del FEES no pueden ser menores a los del año anterior y deben negociarse cada cinco años; sin embargo, ninguno de estos criterios se cumple hoy. El FEES se negocia anualmente y decrece en relación con el PIB, al igual que el 8% constitucional para la educación pública. El FEES pasó de representar un 1,49% del PIB en 2017 a un 1,17% en 2024, lo cual representa recortes millonarios

que afectan becas, transporte, acción social, salarios, sedes regionales y otros. Además, el gobierno mantiene deudas de negociaciones anteriores, como el aumento del 2% al presupuesto 2025 aprobado por la Asamblea Legislativa y que se ha negado a girar.

Eliminar los convenios quinquenales (acuerdos por 5 años) y los recortes presupuestarios, reducen la capacidad de planificación universitaria a mediano plazo, y provocan que cada año haya menos presupuesto para atender más necesidades. Desde los gobiernos del PAC, el FEES dejó de negociarse quinquenalmente y empezó a disminuir en relación con el PIB, tendencia que se profundizó con el gobierno de Rodrigo Chaves.

Las rectorías en lugar de oponerse a los recortes, son cómplices del gobierno, y cada año pactan ajustes en la Comisión de Enlace o proponen “aumentos” nominales inferiores a la inflación, lo que en términos reales son recortes. Como parte del clima ajustador, el CONARE, termina discutiendo sobre la “redistribución interna del FEES” por



una supuesta “injusta” distribución del presupuesto que beneficia a la UCR. Se pelean por ver sobre quién recaen los recortes.

Discutir la redistribución interna del FEES en un contexto de ajuste fiscal, es atentar contra la clase trabajadora, pues representa recortes contra la UCR que serán trasladados hacia el estudiantado becado, infraestructura, acción social, sedes regionales y otras áreas precarizadas en la U. En lugar de cuestionar al gobierno y exigir el 8%, las rectorías se ponen a pelear por migajas. Tampoco podemos dejar de señalar que la oposición a la redistribución del rector de la UCR, Carlos Araya, solamente busca defender sus privilegios como sector burocrático de la universidad, ya que no cuestiona ni al gobierno como principal responsable de los recortes, ni ofrece propuestas para alcanzar el 8% del PIB para educación y el 1,5% para el FEES, y al final de cuentas los recortes no le van a tocar el salario a él, pero sí al estudiante con beca o a la docente interina precarizada.

Este año, las rectorías firmaron un “aumento” nominal del 1% para el FEES 2026, por debajo de la inflación proyectada, manteniendo la tendencia de decrecimiento. Resulta absurdo que, a pesar de tener tanta presión como para exigir una redistribución, el CONARE continúe aceptando cada

año que el presupuesto educativo siga disminuyendo con respecto al PIB.

Tanto el CONARE como el gobierno comparten el consenso recortista, aunque discrepan sobre el monto. Ambos responden a intereses de sectores de la ganancia privada: el gobierno representa [entre otros] a las universidades privadas y las rectorías como Carlos Araya, cercano a Liberación Nacional, a sectores de la clase capitalista tradicional. Para financiar el 8% del PIB para educación y el 1,5% para el FEES se requiere cuestionar las ganancias privadas y exigir impuestos a las zonas francas, las piñeras y a los sectores económicos más lucrativos.

Por su parte, las dirigencias de la FEUCR [Alternativa - Juventud del Frente Amplio e Integra - Juventud de Liberación Nacional] han respaldado estos discursos sin independencia de las rectorías; toman todas las decisiones a espaldas del estudiantado, sin rendir cuentas, ni ampliar la organización estudiantil, lo que lleva a que se normalice un clima antidemocrático y despolitizado que sabotea activamente las luchas estudiantiles por un crecimiento real del FEES. Desde ¡Ya Basta! nos pronunciamos a favor de una redistribución interna del FEES, pero en el marco de que crezca el presupuesto, en miras de alcanzar las metas del 8% para educación y el 1,5% para el FEES,



lo contrario es prestarse al juego de recortes de las élites capitalistas que nos gobiernan.

Además de lo anterior, la FEUCR de Integra provocó este año una crisis en el movimiento estudiantil de la UCR tras el fracaso en la organización de Semana U, y la consiguiente pérdida de 43 millones de colones. La deslegitimación de este órgano estudiantil prácticamente lo inhabilitó como herramienta para dar una lucha contra el gobierno y su política contra nuestro derecho a la educación. El resultado fue, que por primera vez en la historia, el FEES se firmó en la Comisión de Enlace sin protesta estudiantil alguna.

Para salir de la crisis presupuestaria y de la crisis política por la que pasa la universidad, es necesario refundar el movimiento estudiantil, con independencia de las rectorías y con un funcionamiento democrático de base. Desde el movimiento estudiantil debemos asumir los asuntos de la universidad en nuestras propias manos, porque necesitamos universidades que respondan a las necesidades de la clase trabajadora, la juventud y las mujeres.

DESDE ¡YA BASTA! PROPONEMOS

1. Rearmar una lucha por el FEES para alcanzar el 1,5% del PIB en el marco también del 8% para educación.

2. Que vuelva a los convenios FEES quinquenales.

3. Redistribución interna del FEES, pero en el marco del crecimiento general del presupuesto educativo y, por lo tanto, del FEES, no en una situación de recortes.

3. Impuestos a las zonas francas, piñeras y a las actividades económicas más lucrativas para financiar educación y otros derechos.

4. Vamos por una representación de 5 estudiantes, uno por cada universidad, en la Comisión de Enlace.

5. Derogatoria de la regla fiscal.



BECAS QUE SE AJUSTEN AL COSTO DE VIDA ¡YA!

La lucha por becas que se ajusten al costo de vida sigue siendo vigente y necesaria. Desde 2022 con ¡Ya Basta! iniciamos una campaña a favor de las becas para que se ajusten al costo de vida. Debido a que, durante la pandemia todas las clases pasaron a modalidad virtual, la UCR otorgó incrementos del 30 % y 15 % los cuales, cubrían alimentación y gastos de carrera (para conectividad del internet), sin embargo, bajo la rectoría de Gustavo Gutiérrez Espeleta, la universidad eliminó estos montos en el año 2023.

Alternativa, que en ese momento era la FEUCR apoyó esta decisión y al cuestionarles estos recortes, tanto rectoría como el directorio argumentaron que eran montos “temporales” debido a la pandemia, presentándose como una “ayuda” y negando, de esta manera, que se trataba de un recorte a las becas. La

FEUCR de Alternativa además señaló que las becas no alcanzaban “porque las personas estudiantes no sabían gestionarla”, como diciendo “el pobre es pobre porque quiere”, prefirieron ponerse del lado de la rectoría frente al estudiantado.

La negativa de las autoridades para “aumentar” las becas corresponde con un contexto de recortes, un ejemplo de esto es que en el 2022 hubo un “crecimiento del FEES” del 1,34% frente a una inflación de 7,88% esto quiere decir que el FEES decreció 6.54%. Entre 2020 y 2024, el FEES tuvo un aumento acumulado de 5,65%, mientras la inflación fue de 9,71%, lo que representa un rezago de 4,06 puntos porcentuales [Espeleta 2024. Informe del rector, 18]. Desde el 2022 hemos estado organizando asambleas, carteledas, giras a sedes, tomando fotografías, reuniones abiertas, cafeteadas y círculos de lectura, incluso, se organizaron marchas por becas que alcancen. Hasta el día de hoy, sostenemos esta campaña por becas que se ajusten al costo de vida. Lo que la Oficina de Becas considera como una “ayuda” o un “beneficio”.



debería ser un derecho estudiantil, porque para garantizar el derecho básico a la educación, muchos estudiantes necesitan de las becas. Si las becas son insuficientes, no cumplen su objetivo: garantizar la permanencia del estudiantado.

Para los sectores más vulnerables es fundamental acceder a la beca para poder tener derecho a la educación, recordemos que no todos las personas partimos en igualdad de condiciones; una gran parte de quienes recibimos beca provenimos de la clase trabajadora y, en muchos casos, se trata de estudiantes foráneos que deben pagar un lugar donde vivir más cerca de la universidad.

A esto le sumamos los altos costos de los alquileres, vivir cerca de la UCR puede rondar entre los 130.000 colones en el mejor de los casos o hasta los 300.000 colones, teniendo que compartir departamento con 2 o más personas estos departamentos muchas veces no incluyen servicios básicos (Internet, agua, luz) por lo que hay que pagar estos servicios por aparte.

Además, muchas personas se ven obligadas al final de semestre a devolverse a sus lugares de origen, ya que la beca no les alcanza para sobrevivir lo que queda de vacaciones hasta el inicio del nuevo semestre. Un ejemplo de esto es con la última beca de noviembre, la cual cubre el mes y la primera semana de diciembre, el problema es que las

personas estudiantes salen hasta la segunda, incluso tercera semana de diciembre, el alquiler y la alimentación se debe pagar igualmente.

La preocupación de muchos estudiantes es si el alquiler les alcanzará para el siguiente mes, si podrán adquirir materiales de estudio, almorzar o incluso costear el transporte. Por ejemplo, el rubro de transporte de la beca está estancado, pero la tarifa de buses (en colones) se incrementó en agosto 2025: Alajuela-UCR 1.000, Acosta-UCR 1.330, Coronado 630, Heredia 790, Tibás 640, Desamparados Aserrí 600, San Rafael San Juan de Dios 670, Santa Ana Escazú 840, San Ramón 2.200, y Pavas 840 [montos que siguen incrementando].

A esto se le suma que se están recortando las rutas de los autobuses de la UCR, como los casos de la UCR a Cartago, Calle Blancos, El Carmen, que se cerraron totalmente. Incluso otras han recortado la frecuencia de horarios como por ejemplo Alajuelita, Tibás, San Juan de Dios, Acosta, Aserrí, Coronado, Desamparados, Grecia, Pavas, San Rafael Abajo, San Ramón, Santa Ana, entre otras.

También, existe el problema de que los criterios para asignar los montos de alimentación no corresponden a la realidad del estudiantado, por ejemplo, a un estudiante que matricule un curso un día de 10:00 a 1:00 no se le deposita almuerzo ese día, porque la



U asume que el estudiante se puede ir a su casa a comer, como si no tuviera que comprar comida para preparar en su casa, o como si nunca tuviera que quedarse en la U después de curso, ya sea estudiando, reuniéndose para hacer trabajos grupales, o asistiendo a horas de consulta u otras actividades.

Todas las personas estudiantes deberían poder tener los tres tiempos de comida dignamente, ya que está cada vez más caro comer. Según Villalobos (2025) en el 2011 una persona necesitaba 40.265 colones para cubrir alimentación, al día de hoy 2025 la CBA (Canasta básica alimentaria) una sola persona necesita ¢61.997, lo cual indica un incremento de 21.732 colones en los últimos 11 años, o sea, un 54% de aumento entre 2014 y el 2025. Debido a que el costo de la canasta básica es alto, los precios de las sodas de la U están caros y que la universidad no da el monto suficiente de alimentación, es necesario habilitar el comedor estudiantil, para tener una opción más accesible en alimentación.

A esto le sumamos que debido a los montos de la beca, muchos estudiantes se ven obligados a buscar trabajos precarizados y sin derechos para poder completar sus gastos, en dado caso que encuentren un trabajo formal y OBAS se entera, se le quita la beca al estudiante. Necesitamos becas que se ajusten a los gastos reales del estudiantado para que no se vean en la necesidad de buscar y/o estar en un trabajo precarizado para

completar los gastos; ninguna persona estudiante debería elegir entre estudiar o sobrevivir. Incluso hay trabajos formales que son precarizados, lo cual no debería ser excluyente para la asignación de una beca. Una beca que se ajuste al costo de vida es lo que garantiza la permanencia del sector estudiantado más empobrecido en las aulas.

DESDE ¡YA BASTA! PROPONEMOS

1. Que se reforme el Reglamento de Becas con dos objetivos principales: 1) que todos los años los montos de becas se ajusten con la inflación, es decir, que se ajusten al costo real de la vida, y 2) que la beca sea considerada como un derecho para el estudiantado en condiciones socioeconómicas más vulnerables, y no solamente como una ayuda o beneficio.

2. Que la OBAS funcione de forma democrática, transparente y con participación real de lxs estudiantes becadxs.

3. Que la FEUCR facilite la organización del estudiantado becado en todas las sedes y recintos, mediante asambleas públicas y abiertas para informar al estudiantado, organizarnos y tomar decisiones colectivamente. Hay que construir un movimiento estudiantil con objetivos claros, funcionamiento democrático de base y abierto, sin confianza en las autoridades universitarias y burocráticas.

4. Que la FEUCR de manera independiente con sus propios recursos realice un estudio sobre el costo de la vida en cada sede y recinto, con participación directa de estudiantes becadxs de las mismas sedes y recintos, con el fin de justificar y organizar la lucha por becas que se ajusten a la realidad de cada región.

5. Exigir a la OBAS una mejora inmediata en los montos de reubicación geográfica para las personas estudiantes becadxs que viven en las cercanías de la Sede de Guanacaste, ya que el problema de gentrificación está encareciendo seriamente los alquileres.

6. Exigir un estudio para crear un monto adicional destinado a estudiantes cuyas carreras requieren materiales, giras (Odontología, Arquitectura, Artes, Ingeniería Eléctrica, etc.) o prácticas curriculares, para que puedan cubrir esos gastos.

7. Exigir a las autoridades universitarias, movilizar los recursos necesarios para solventar el problema de infraestructura que tiene el comedor estudiantil, de manera que se busque habilitarlo, para que el estudiantado goce de una opción más accesible de alimentación.

8. Que la Oficina de Becas haga públicos los criterios que utilizan para asignar las becas y que se implemente un sistema de monitoreo con informes anuales y públicos sobre su funcionamiento.

9. Exigir que el hecho de trabajar no sea un criterio que afecte la asignación ni la permanencia de la beca.

10. Quitar el artículo 10 del reglamento de becas, para que los beneficios de reubicación y transporte no sean excluyentes entre sí.

PROPUESTAS POR ÁREAS





VAMOS POR EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE RESIDENCIAS

Una de las mayores conquistas sociales dentro del campus universitario, son las residencias, apartamentos comunitarios para el estudiantado de sectores de la clase trabajadora que por su lejanía a la universidad y otras dificultades económicas, deben solicitar un cupo en estos espacios para poder estudiar.

Más de 14 mil personas han sido beneficiadas por este servicio estudiantil en las últimas dos décadas, y según el Informe del Rector (2024) solo en Facio había 259 estudiantes, un 46,1% del total de población residente, para un total de 562 en todas las sedes y recintos. Sin este espacio, muchas personas no podrían estudiar, ya que conseguir un apartamento es cada vez más complicado y a esto se suma el

costo del transporte estudiantil.

En los últimos años, se ha visto una reducción significativa del FEES por lo que muchos proyectos de infraestructura se han visto afectados, esto es culpa de los recortes que impone el gobierno y también la Regla Fiscal, por lo que nos oponemos rotundamente a la susodicha regla.

Cabe mencionar la contra-reforma a resi de parte del Consejo Universitario (impulsada y celebrada por Integra), que el año pasado puso un límite al tiempo de estadía a 4 años para, supuestamente, abarcar mejor la demanda, esto es un ajuste contra el estudiantado, ya que limita el acceso a un derecho, y ni siquiera tome en cuenta que, en la gran mayoría de los casos, las personas no se gradúan en 4 años.

Además, edificios como el de RE frente a la Facultad de Educación, está ya bastante viejo y no le han dado mucho mantenimiento, sumado a que su posición al lado de la calle lo vuelve bastante inseguro, estos



problemas son claramente síntoma del desfinanciamiento a la educación superior que nos impone el gobierno.

Asimismo, dentro de residencias se cobra mensualmente al estudiantado una cuota de cocina y apartamento, para comprar los utensilios de limpieza. Se supone que esto lo debería financiar la universidad, pero se cobra al propio estudiantado que ya de por sí tiene una paupérrima beca.

Nuestro programa político tiene prioritario el mantenimiento de esta tríada de conquistas: vamos por transporte estudiantil gratuito, becas ajustadas a inflación y que resi sea accesible a cada estudiante que así lo requiera sin un límite de estadía.

DESDE ¡YA BASTA! PROPONEMOS

1. Reformar el reglamento de Residencias para eliminar el tiempo límite de estadía dentro de Resi, ¡qué cada persona tenga tiempo para completar su carrera!

2. Eliminar los cobros dentro de Resi, ¡qué la universidad ponga los utensilios de limpieza y cocina!

3. Tener seguridad 24/7 en todos los edificios de Resi, sumado a la implementación de botones de pánico dentro de Resi, como los que rodean la universidad. ¡Hasta la Biblioteca Monge tiene uno y no es posible que donde se aloje tanto estudiantado corramos la seguridad a nuestra suerte!

4. Exigir más presupuesto a infraestructura para la construcción de nuevos edificios para albergar más estudiantes, ¡Resi es un derecho!

5. Dar mantenimiento continuo a los edificios, cada tanto se averían lavadoras o secadoras, ocurren fugas también, ¡necesitamos darle todo el cuidado posible a los edificios y es responsabilidad de la universidad el garantizarlo!



POR MEJORES CONDICIONES PARA LAS SEDES Y RECINTOS REGIONALES

Actualmente, la población matriculada en sedes y recintos regionales representa alrededor del 27%. De esta entre el 75% y el 90% cuenta con algún tipo de beca (la cual varía dependiendo de la sede o recinto). Tal como ocurre a nivel nacional las desigualdades se agudizan en comparación con las problemáticas presentes en la GAM y las oportunidades ya sea de estudio o de empleo son menores.

La insuficiencia de cupos y horarios, el cierre de proyectos de TCU, las posibilidades de acceder a atención psicológica, orientación o la atención a las denuncias por acoso u hostigamiento sexual, la casita infantil, entre otras muchas cosas más son la tónica. A lo anterior se le suma el déficit en infraestructura como laboratorios, aulas, sistemas eléctricos o al agua potable.

En el caso de la Sede del Atlántico estos déficits se traducen en problemas con

el convenio para el uso de la piscina, los problemas para construir un auditorio y biblioteca luego de que la empresa rompiera el contrato cuando llevaba entre el 60 y 85% de la obra de construcción. En la Sede del Pacífico, hay problemas con el acceso al agua potable y a los espacios de socialización dentro del campus, que son, prácticamente, inexistentes.

En la Sede de Guanacaste hace falta mucha inversión en herramientas TIC's para mejorar los conocimientos, capacidades y posibilidades de la formación y equiparar la calidad con otras instituciones de la zona y ni que decir con las de la Sede Rodrigo Facio. Hace falta un puente peatonal frente a la entrada debido a la peligrosidad de la vía y la ocurrencia de accidentes de tránsito. También en la sede, hacen falta zonas techadas para la convivencia, alimentación y estudio, como espacios de socialización para el estudiantado.

En las sedes de Occidente, Limón y Guanacaste, se reportan necesidades de laboratorios especializados con su respectivo equipamiento, en casos como psicología, diseño gráfico, ciencias básicas, laboratorios de



cómputo, etc. Asimismo, se evidencia en todas las sedes y recintos, la necesidad para invertir más recursos en la atención de la salud mental, pues no dan abasto las personas profesionales en psicología y mucha gente está urgida de tratarse. Sin salud mental no hay educación de calidad.

En la Sede del Caribe los problemas de infraestructura se expresan a través de las llamadas “aulas gallinero” debido al pésimo estado de las mismas y el hacinamiento que se vive. También hay problemas por acoso sexual, cupos y los pocos horarios de transporte para la sede e invasión de serpientes en las instalaciones.

Los déficits en las sedes se extienden a otras áreas, como el plano académico. Durante el año pasado la universidad ofertó 173 carreras en todas sus sedes y recintos, de ellas 84 se concentraban en Facio y 85 en las sedes regionales.

De las carreras ofertadas en las regiones sólo el 22.1% cuentan con algún tipo de certificación (de ellas solo el 16,5% se encuentran acreditadas) mientras el 13.6% se encuentra en proceso de evaluación. Es decir, un 64.3% de las carreras fuera del GAM no cuentan con ningún tipo de proceso para certificarse. Además, por ejemplo, en la Sede del Atlántico hay problemas con la asignación de presupuesto para investigación, acción social y laboratorios, sumado a los problemas con los tiempos docentes

[que también ocurre en Pacífico].

Respecto a la Sede de Occidente los problemas van desde la dificultad con las franjas horarias, pues muchos de los cursos tienen pocas opciones en su oferta, un debilitamiento o poco interés por el transporte inter-sedes el cual es muy escaso.

Otra de las problemáticas que pesa más en las sedes regionales son los casos de acoso y hostigamiento sexual. Es de resaltar el escándalo en la Sede de Guanacaste donde se detectó una red de tráfico de drogas, trata y acoso sexual. Al final, el director de la Sede fue exonerado, ya que no se demostró culpabilidad.

Esto da cuenta de una práctica usual en la universidad: cuando se dan casos de acoso en Facio resulta mucho más fácil reubicar al docente y/o funcionario en una sede regional. Esto provoca un desplazamiento de las redes de violencia misógina hacia las regiones, donde, dicho sea de paso, el acceso a mecanismos para denunciar o llevar procesos de atención psicológica son mucho más deficitarios. El modelo educativo que tenemos hoy en la UCR está en disputa. La educación universitaria no siempre ha sido la misma. Antes, no había autonomía y el control político y administrativo estaba en manos de la iglesia y el gobierno, quienes definían la apertura de carreras, contenidos y docentes, y donde solo

DESDE ¡YA BASTA! PROPONEMOS

1. Inversión en infraestructura para las sedes y recintos más abandonados y con mayores necesidades, sea en aulas, sistemas de aire acondicionado, edificios, laboratorios especializados, casitas infantiles, techados, espacios de sodas, acceso al agua potable, etc.
2. Mayor inversión y contratación de personal en psicología para la atención de la salud mental en todas las sedes y recintos de la U.
3. No al cierre de carreras en las sedes y recintos regionales, apertura de más opciones de carreras con la participación estudiantil para la toma de estas decisiones.
4. Construir un movimiento estudiantil combativo en las sedes y recintos, articulado en conjunto con la Sede Rodrigo Facio, para que vayamos con una agenda propia a la lucha por el FEES, para que una de nuestras prioridades sea el crecimiento del presupuesto para invertir en las necesidades de las sedes y recintos regionales.
5. Exigirle a la Rectoría e impulsar en el Consejo Universitario la ampliación de la atención por casos de acoso y hostigamiento sexual, con la apertura o fortalecimiento de las oficinas del CIEM en las distintas sedes y recintos regionales.
6. Impulsar en el Consejo Universitario una reforma al reglamento del TCU para incrementar la oferta de aportes de trabajo comunal en las regiones para cubrir la demanda de las poblaciones estudiantiles locales.
7. Luchar por mayor estabilización laboral para el personal docente y trabajador.



MODELO EDUCATIVO: LA UNIVERSIDAD PARA LA CLASE TRABAJADORA

ingresaban los hijos de las élites coloniales de entonces. Hoy tenemos un modelo educativo distinto a eso, que fue resultado de las luchas del pasado y que debemos buena parte a la Reforma de Córdoba de 1918 en Argentina.

En este proceso, el movimiento estudiantil cuestionó ese modelo de universidad, exigió científicidad y laicismo, presionó para poder ser parte de la toma de decisiones, se preocupó por el vínculo de la universidad con el resto de la sociedad y conquistó la autonomía universitaria.

Entre las principales conquistas de la Reforma de Córdoba destacamos:

1. Autonomía Universitaria: Que libra a las universidades del control gubernamental directo, es decir, permite a la universidad definir su propia agenda, plan de estudios, ofrecer una educación filosófica, científica y social libre, sin restricciones o intereses estatales de los gobiernos de turno, puesto que la educación no debe o tiene que ser definida por intereses políticos particulares o religiosos, sino que debe

ser para el beneficio de las mayorías sociales, la clase trabajadora, y además laica, libre, científica y honesta.

2. Democratización: Ante un sistema cerrado en que el gobierno y la clase alta política tenían derecho a decidir sobre el acceso y el contenido educativo, se adoptó una nueva figura democrática de gobierno universitario tripartito con el fin de dar una participación equitativa sobre la toma de decisiones respectivas a la universidad a cada sector de la misma, incluyendo a los estudiantes en un 33% de la junta, docentes con otro 33% y graduados con el 33% final. Esto con el fin de promover un sistema de participación estudiantil en el que cada parte del sistema educativo tenga un voto y una presencia equitativa en la toma de decisiones.

3. Acción Social: Se establece un compromiso social en la universidad como forma de soporte, apoyo y retribución a la sociedad por medio de investigación en problemas sociales, elaboración de proyectos que busquen resolver los problemas investigados y



una participación activa con proyectos de bienestar social, en suma un compromiso con la transformación social.

4. Educación Social: Que busca romper con métodos de enseñanza tradicionales y anticuados y adaptar la enseñanza a la sociedad, desarrollándose técnicas de aprendizaje práctico, el pensamiento crítico y las humanidades, materias de distintos enfoques como la filosofía, las artes y el deporte a través de las cuales los estudiantes puedan, no solo tener un respiro, sino también tener aprendizajes culturales y sociales más allá de sus propias carreras.

5. Universalidad de la Educación: Se garantiza la educación como un derecho humano y por ende cada persona debería tener acceso a una educación de calidad y sin discriminación o exclusión por motivos de clase, género, región de origen, etc.

6. Gratuidad de la Educación: Se establece que la educación pública debe ser gratuita y cubierta por el Estado, en caso de ser necesario debe existir un programa de becas para favorecer el acceso de los estudiantes a la institución educativa.

Todas estas conquistas hoy están siendo amenazadas por las derechas que nos gobiernan y que nos han gobernado.

Empezando porque la educación superior en Costa Rica ni siquiera es gratuita, pues quienes no tienen alguna categoría de beca, siempre tienen que pagar matrícula. También, los recortes presupuestarios constantes y la crisis educativa, afectan la universalidad de la educación, pues se hace cada vez más difícil lograr el ingreso pero sobre todo permanecer y graduarse.

Por su parte, la acción social es de los rubros que más se reducen en este marco de recortes presupuestarios, pues parece ser un aspecto secundario o terciario, para la universidad. La autonomía universitaria también se pone en cuestionamiento permanentemente por las derechas, e incluso en complicidad con las rectorías. Por mencionar algunos ejemplos, el préstamo con el Banco Mundial trastoca el modelo de autonomía universitaria, al condicionar el préstamo para ciertas áreas previamente definidas por el banco, no por las universidades. Asimismo, los acuerdos por el FEES firmados recientemente imponen “criterios de evaluación” impuestos por el gobierno y dócilmente aceptados por las rectorías, marcando una línea política de prioridades para las U públicas.

Ni que decir respecto al aspecto de la democratización, que ni siquiera llegó completo a Costa Rica, pues mientras Córdoba implementó un modelo tripartido de igual proporción para cada sector (estudiantes, docentes y graduados), en Costa Rica se distorsionó, y en la UCR



los espacios de toma de decisión tienen un 50% para el sector administrativo, 25% para el estudiantil y 25% para la docencia con propiedad (el sector trabajador interino queda por fuera a pesar de representar cerca del 65% de la fuerza laboral de la U).

La discusión sobre el modelo de educación es fundamental en un panorama donde todo está en cuestionamiento, donde todo nos lo quieren quitar. Desde nuestra perspectiva, la universidad pública es una conquista social de décadas de luchas obreras y estudiantiles, y por ende, defendemos un modelo de educación al servicio de los sectores sociales explotados y oprimidos, en concreto, necesitamos universidades para la clase trabajadora, no al servicio de las ganancias privadas, las empresas o el mercado internacional.

La experiencia en Córdoba ha dejado un legado palpable hasta nuestros días. Una mayor participación estudiantil y universalización de la educación superior siguen vigentes y cobran mayor fuerza en la actualidad donde la extrema derecha quiere un modelo educativo que precariza lo público, en beneficio de la acumulación de riquezas privadas y el mercado.

DESDE ¡YA BASTA! PROPONEMOS

1. Realizar jornadas de reflexión, formación política, debates y discusión alrededor del modelo de educación, la historia del movimiento estudiantil latinoamericano y las conquistas históricas, con el fin de defender un modelo de universidad para la clase trabajadora.
2. Impulsar una reforma institucional en la universidad para ganar el voto universal para todas las personas trabajadoras y la población estudiantil, es decir, una persona un voto para todo cargo representativo-político universitario.



MOVIMIENTO ESTUDIANTIL: FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO DESDE LAS BASES

El movimiento estudiantil es un actor político y social fundamental en el país, surgido con la lucha de ALCOA en 1970, cuando se elevó por primera vez como sujeto político nacional. Desde entonces, ha estado presente en importantes movilizaciones sociales, como el Combo ICE, la lucha contra el TLC, la lucha contra Crucitas, la defensa de la educación pública y muchas otras. Su relevancia volvió a evidenciarse en 2022 con la masiva marcha por el FEES, donde más de 30 mil personas frenaron el intento del gobierno enemigo de la educación pública de Rodrigo Chaves de cortarle 129 mil millones al presupuesto universitario, la marcha más grande por el FEES que hubo en el país.

Sin embargo, el movimiento se ve afectado por una crisis más amplia de los movimientos sociales, tras las derrotas sufridas frente a la triada de

políticas neoliberales del PAC: la ley anti huelgas, el plan fiscal y la Ley de Empleo Público. Sumado a esto, factores como los efectos de la pandemia, la contención del descontento y las luchas por parte de anteriores directorios federativos [Alternativa e Integra] y la traición de las rectorías, profundizan la crisis política y democrática del movimiento estudiantil.

Aun así, en los últimos años ha surgido una pequeña vanguardia estudiantil combativa e independiente de la cual somos parte, y que ha logrado algunas victorias, como frenar la firma del FEES durante las vacaciones en 2024, mientras la mayoría del estudiantado foráneo habría estado excluido de la discusión. El sector estudiantil es de los más críticos e independientes con respecto a las políticas recortistas y conservadoras del gobierno actual. Por ejemplo, a inicios de 2025 con la protesta contra los ataques del gobierno hacia el protocolo antibullying



LGBT+ y la eliminación de la guía de sexualidad y afectividad del MEP.

Desde la Juventud Anticapitalista de ¡Ya Basta! somos una organización estudiantil de lucha constante, y no de esas que solamente aparecen en elecciones y luego desaparecen. Apoyamos la lucha estudiantil con pasadas por aulas, reuniones abiertas, volanteadas, puestos informativos y demás actividades. Motivamos al estudiantado a sumarse a refundar el movimiento estudiantil sobre bases independientes de las rectorías, de lucha y con un funcionamiento democrático de bases, para enfrentar los ataques a la educación y derechos democráticos impulsados desde arriba.

El fracaso de la FEUCR de Integra

En abril de este año, la FEUCR de Integra fracasó rotundamente a la hora de organizar un evento de importancia cultural e histórica para el movimiento estudiantil: la Semana U 2025, perdiendo 43 millones de colones. Por si fuera poco, duraron varios días sin dar explicación al estudiantado sobre lo que había pasado, lo que consideramos un funcionamiento antidemocrático, cerrado entre cuatro paredes y que contribuye a deslegitimar el espacio. Incluso, esto fue aprovechado por el gobierno para justificar sus ataques a la educación superior pública, ya que estaban empezando las negociaciones

del FEES 2026.

Tanto las federaciones de Alternativa como de Integra, funcionan entre cuatro paredes, lo que se expresa en tomar decisiones a espaldas del estudiantado, evitan rendir cuentas y utilizar el aparato federativo como trampolín político. Por el contrario, nuestra perspectiva es que la FEUCR debería ser un espacio de organización de las bases del movimiento estudiantil. Así, contribuyen a la deslegitimación del movimiento estudiantil y a su falta de organización y perspectivas.

La toma FEUCR: despolitizada y antidemocrática

El fracaso organizativo de la Semana U generó un fuerte descontento estudiantil, lo que llevó a demandas legítimas de renuncia del directorio de Integra, pues quedó deslegitimado para representar al estudiantado en las negociaciones del FEES. Ante la presión, en mayo la expresidenta de la FEUCR renunció ante el Consejo Superior Estudiantil (CSE), y el cuerpo coordinador convocó a una toma del edificio de la FEUCR, ya que el resto del directorio no dimitió.

Desde ¡Ya Basta! decidimos no sumarnos a la toma por dos razones: primero, fue un conflicto de aparatos entre Integra y Alternativa, dirigido a destituir un directorio para elegir otro (a puerta cerrada) y no tenía una política que armara al movimiento estudiantil



frente a los ataques del gobierno. Se organizó de manera inconsulta y burocrática, sin someter la decisión a votación en asamblea, a diferencia de las tomas de 2019, que fueron abiertas, democráticas y desde las bases, con una política de luchar contra los recortes. Segundo, porque el espacio de la toma excluía a los partidos políticos, lo que consideramos antidemocrático, ya que los partidos somos parte del movimiento estudiantil. Esta medida resultó además hipócrita, pues partidos como Alternativa y Reforma participaron y tuvieron vocerías en la toma.

Militar en un partido es una manera legítima de organizarse, los partidos agrupan personas en torno a una idea: el programa político. Evitar la participación de partidos en espacios estudiantiles es una forma de discriminación política y un acto antidemocrático, además impide asumir responsabilidades políticas y rendir cuentas, ya que si se reconociera abiertamente la militancia, las propuestas tendrían un respaldo claro y sería posible evaluar los aciertos o errores de quienes las impulsan.

Rechazar esta participación implica una despolitización que promueve que se oculten las identidades y los programas políticos, generando confusión, desconfianza y falta de transparencia, el debate político maduro, honesto y transparente entre distintas propuestas fortalece el movimiento estudiantil,

permitiendo definir colectivamente los intereses del estudiantado.

La toma de la FEUCR no logró formular una propuesta política clara para enfrentar la crisis, ya que sólo exigió la renuncia del directorio sin plantear qué pasaría después. Según el reglamento, si el directorio renunciaba, no se convocarían a elecciones anticipadas, sino que el CSE elegiría de forma antidemocrática a la nueva presidencia y vicepresidencia, dónde Alternativa tenía mayoría de votos, esta acción fue promovida en la toma por Alternativa para recuperar la FEUCR sin elecciones democráticas.

Ante esta incertidumbre, desde ¡Ya Basta! impulsamos una campaña de firmas para convocar a una Asamblea General de Estudiantes Universitarios (AGEU) que eligiera democráticamente un directorio transitorio con legitimidad para representar al movimiento estudiantil en la lucha por el FEES, en donde se invitó a sumarse al CSE, asociaciones y partidos como Alternativa y Reforma, pero no hubo respuesta. Al contrario, compañeros independientes que insistían en discutir democráticamente fueron amedrentados o excluidos, y la toma se vació, fracasando en su objetivo de presionar al directorio a renunciar.

Desde ¡Ya Basta! denunciarnos que partidos como Alternativa instrumentalizan el aparato federativo



y el movimiento estudiantil, priorizando la politiquería sobre la discusión política seria, lo que genera despolitización y desorganización. Sostenemos que la política debe basarse en intereses comunes y discutirse de manera democrática, madura y transparente para que el movimiento estudiantil supere su crisis.

La Toma de Artes

La Toma de Artes es un ejemplo de la capacidad organizativa e impacto del movimiento estudiantil. Desde ¡Ya Basta! apoyamos esta lucha y su política clara por un nuevo edificio para artes, y que fue votada democráticamente en la Asamblea Autónoma de Artes Plásticas sin excluir a estudiantes por su forma de organizarse.

La protesta respondió al abandono del edificio actual de artes y el estancamiento de la restauración del antiguo edificio de ingeniería que sería destinado a la facultad. Los estudiantes enfrentaban condiciones marginales como plagas, inundaciones, hacinamiento y riesgos de intoxicación.

La toma se construyó mediante asambleas abiertas, con comisiones y decisiones colectivas, logrando que Carlos Araya se comprometiera con sus demandas, pese a su historial de represión contra el movimiento estudiantil. Entre las conquistas alcanzadas se incluyen mejoras en el edificio (techos, muebles, botiquines,

salidas de emergencia, fumigación] y compromisos de la rectoría para aumentar el presupuesto de la Facultad y avanzar en la construcción del nuevo edificio.

Esta experiencia demuestra que el movimiento estudiantil puede organizarse desde las bases y a partir de intereses colectivos, generando luchas efectivas dentro y fuera de la universidad. Al no prohibirse la participación de partidos, fue un espacio abierto a la discusión política, permitiendo compartir experiencias, presentar programas democráticamente y hacer propuestas transparentes, es por eso que desde ¡Ya Basta! valoramos esta experiencia como un modelo de construcción del cual todo el movimiento estudiantil debe aprender para enfrentar los ataques a la educación pública.

DESDE ¡YA BASTA! PROPONEMOS

1. Funcionamiento de democracia de base estudiantil mediante asambleas abiertas, públicas y permanentes.
2. Un plan de formación política para el estudiantado, sobre movimientos estudiantiles, sus formas de organizarse y sus luchas en diferentes países.
3. Un Boletín FEUCR para comunicar permanentemente con el estudiantado y publicar posiciones políticas de interés.
4. Luchar por más espacios para difundir las discusiones, necesidades y posiciones del movimiento estudiantil, como las pizarras informativas.
5. Luchar para que no se censuren las diversas expresiones artísticas de protesta del movimiento estudiantil, como la exposición de la toma de artes.
6. Coordinar con otras organizaciones estudiantiles como asociaciones, federaciones u organizaciones de secundaria, para construir una agenda común de cara a conquistar el 8% del PIB para educación.
7. Organizar la Semana U con mayor participación estudiantil, coordinando con todas las asociaciones de estudiantes en las sedes y recintos, donde se puedan llevar actividades culturales como presentar el arte, la producción y los proyectos del estudiantado a todas las sedes junto con charlas y espacios para la discusión política.
8. Puestos informativos y pasadas por aulas para acercarnos al estudiantado, informar, convocar y rendir cuentas del trabajo del directorio.
9. Buscar un aceleramiento del proceso para acreditar comisiones del movimiento estudiantil para tener una mejor capacidad de respuesta.

LUCHAS DEL FEMINISMO Y LAS PERSONAS LGBT+





POR ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

Desde ¡Ya Basta! nos caracterizamos por mantener una lucha permanente por la emancipación de la mujer y la comunidad LGBT+, sectores oprimidos por el capitalismo y el patriarcado. Nos reivindicamos feministas socialistas, dado que la lucha por la liberación de la mujer exige luchar, de manera simultánea, contra ambas estructuras, en tanto el capitalismo aprovecha las desigualdades culturales que genera el patriarcado en la doble opresión de las mujeres.

Por aborto legal, seguro y gratuito

Nos posicionamos a favor del aborto legal, seguro y gratuito, defendemos el derecho a decidir como un derecho humano y el acceso a condiciones adecuadas de salud para hacerlo. Desde nuestra perspectiva sostenemos que el aborto legal, seguro y gratuito es una pelea histórica del feminismo en este siglo XXI. Este es un derecho de las mujeres y personas gestantes que se encuentra en disputa, mientras la Marea Verde recorre

el mundo, los reaccionarios y la extrema derecha cuestionan que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos.

En este contexto, se puede identificar la doble opresión estructural vivida por las mujeres, desde la clase y el patriarcado, las mujeres en condiciones económicas más vulnerables son quienes están más expuestas a peligros al tratar de acceder a un aborto. Consideramos que las reivindicaciones democráticas por los derechos igualitarios de la población LGBT+ se encuentran íntimamente ligadas a la lucha contra el capitalismo, pues se ven afectadas por la presión ejercida por parte de las instituciones burguesas y patriarcales.

En el caso de Costa Rica, el aborto solo es legal de manera terapéutica, es decir, cuando la vida del feto o la madre corren peligro. Esto crea una diferencia de clase en torno al acceso al aborto, ya que, mientras las mujeres de las familias ricas pueden ir a otro país a practicarse dicho procedimiento, las mujeres trabajadoras ven violentado su derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Sobre la misma línea, la norma técnica del aborto terapéutico fue una conquista del movimiento feminista en el 2019, con



jornadas de lucha y movilización en el marco del crecimiento de la Marea Verde a nivel internacional y frente a la negativa del gobierno del PAC de firmarla.

Esta norma atiende a las mujeres en situaciones donde su embarazo sea inviable, o en donde peligre la salud y la vida de la mujer; el artículo 121 del Código Penal, vigente desde 1970, establece lo siguiente: “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios.”

Este derecho conquistado ha sido frecuentemente blanco de ataques por parte de los conservadores, la Iglesia y recientemente por el gobierno de Rodrigo Chaves, el cual por promesa a la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC) eliminó la norma técnica el pasado 15 de octubre del 2025.

No es coincidencia que este ataque ocurra en vísperas de campaña electoral, ya que el mismo Rodrigo Chaves sabe que el tema del aborto es un tema país vigente —a diferencia de la postura tibia y conservadora del Frente Amplio, que no lo ve como un tema de “discusión actual”— utilizando los derechos de las mujeres para polarizar la discusión y así obtener el apoyo y voto del sector

evangélico monopolizado por Nueva República.

La prohibición del aborto arroja a muchas mujeres que necesitan dicho procedimiento a la clandestinidad, los datos más recientes a ese respecto son de hace nueve años. Según la Asociación Demográfica Costarricense (ADC) entre los años 2007 y 2008 se practicaban 27.000 abortos inducidos por año. Fuera de eso, no existen datos en el país respecto de la clandestinidad. El gobierno le prohíbe a las mujeres acceder a un procedimiento médico para salvar sus vidas y salud (estipulado en el artículo 121 del Código Penal), y se las obliga a llevar a término embarazos con muerte fetal; con esto Chaves reafirma su compromiso con hacer sufrir, torturar y asesinar a las mujeres ¡Una brutalidad! Para las feministas anticapitalistas, el aborto legal, seguro y gratuito sí es un tema relevante, es un derecho que debemos conquistar y ya hay experiencia para llevar adelante la lucha. Un ejemplo del cual se puede aprender es la Marea Verde de Argentina, un movimiento de mujeres que se organizó durante décadas para ganar en las calles a una mayoría social y así fue como conquistaron el aborto legal, seguro y gratuito.

Por eso, en la actual coyuntura, frente a los reaccionarios que nos quieren dejar sin derecho a decidir sobre nuestros cuerpos es necesario organizarnos por aborto legal, seguro y gratuito.

DESDE ¡YA BASTA! PROPONEMOS

1. Que la FEUCR junto a otras organizaciones feministas, asociaciones estudiantiles y otras, levante una campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito y en defensa de la norma técnica.

2. Es necesario rearmar el movimiento feminista, para eso el movimiento estudiantil puede convertirse en un epicentro de organización, con pañuelazos, mitines, asambleas para fortalecer la lucha feminista y LGBT+.



POR ¡NI UNA MENOS!

La violencia estructural contra las mujeres se manifiesta por ejemplo, en la brecha salarial, ser quienes encabezan la tasa de desempleo o los hogares empobrecidos (en el caso de las jefaturas femeninas), el acoso sexual y un largo etcétera. Toda esta opresión tiene su culmen en una de las formas más violentas contra las mujeres: los feminicidios. Además, durante estos años luego de la pandemia, la violencia no hace más que subir.

Para el año 2023 y 2024, la violencia ha ido en aumento debido al incremento de la violencia e inseguridad que enfrenta al país el cual se manifiesta mediante dos vías: tanto en narcotráfico como en género; dando cuenta del vaciamiento social que enfrenta Costa Rica.

Los años posteriores a la pandemia experimentamos una ola de violencia misógina en varios planos, que van desde el aumento en brutalidad y cantidad de los femicidios, para marzo del 2025 ya se contabilizaban 11. Hasta el incremento en las denuncias por violencia doméstica, para 2020 a 2023,

se han reportado un total de 30.000 denuncias, de las cuales 10.000 se hicieron sólo en el 2023 y, para el año pasado los casos de violencia doméstica llegaron a 23.046.

Debido a lo anterior, como secuela se da un aumento en las denuncias por violencia doméstica y además los feminicidios crecen tanto en cantidad como en brutalidad, esto se puede ver reflejado en el caso (del año anterior) de Nadia Peraza por ejemplo. Esto según datos del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, evidenciando la cultura machista y patriarcal, siendo la expresión más extrema de dominio sobre la vida y los cuerpos de las mujeres.

En el plano universitario el incremento de la violencia misógina también se traduce en un aumento en los casos de acoso sexual, entre el 2020 y el 2022 las denuncias se triplicaron: mientras en el 2020 hubo 9 denuncias formales, para el 2022 crecieron a 28. A eso se le suma que el principal “castigo” para el personal acusado de acoso es reubicarlo en una sede regional, lo cual sólo traslada el problema hacia las estudiantes en esos lugares.

Es de remarcar que el fenómeno de la



violencia de género tiene asidero en el sistema patriarcal que busca reducir a las mujeres a objetos sin capacidad de decidir sobre sus vidas. No tiene raíz en otros tipos de violencia como el narcotráfico, por lo cual, pretender abordar este fenómeno desde perspectivas punitivistas (como lo propone el Frente Amplio) lo consideramos errado.

Ante esta situación de violencia, el movimiento de mujeres sale a las calles, al grito de “ni una menos”, protagonizando manifestaciones multitudinarias el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha en la cual se marcha en protesta contra la violencia patriarcal, deben ser espacios que se retomen con determinación y se llenen de propuestas concretas para poner fin a la violencia.

Es necesario remarcar que, para acabar con la violencia misógina se debe impulsar la organización feminista y anticapitalista, por ello queremos dar una discusión para rearmar al movimiento feminista, retomar espacios democráticos, como las asambleas, y volver a las calles para luchar por todos nuestros derechos, desde el aborto legal hasta ni una menos.

DESDE ¡YA BASTA! PROPONEMOS

1. Impulsar una campaña en contra de la violencia patriarcal y por ni una menos.

2. Organizar movilizaciones en la UCR, en todas las sedes y recintos, para enfrentar el acoso sexual dentro de la universidad. Es necesario que deje de prevalecer la impunidad de los acosadores quienes siguen dando clases, sólo que en otra sede.

3. Es necesario rearmar el movimiento feminista, para eso el movimiento estudiantil puede convertirse en un epicentro de organización, con pañuelazos, mitines, asambleas para fortalecer la lucha feminista y LGBT+.

4. Mejorar la atención y los cupos de la Casita Infantil de la universidad, que se amplíe el rango de edad de las personas menores de edad a quienes recibe, que se amplíen los cupos y la cobertura en todas las sedes y recintos. Además, que el horario de cuido tome en cuenta, no sólo las horas de clases, sino también los tiempos para hacer trabajos.

5. Mejorar el acceso y las instalaciones de las salas de lactancia. En muchos casos son “cuartos” que no cumplen con todas las necesidades para poder llevar adelante de la mejor manera la alimentación de les niños.



POR EDUCACIÓN SEXUAL, LAICA, CIENTÍFICA Y FEMINISTA

En defensa de los programas de educación sexual

Para el año 2025, el Consejo Superior de Educación (CSE) junto con la propuesta de la exministra de Educación Anna Katharina Müller Castro, se eliminó el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral (Paysi) implementado desde el año 2012 bajo ningún criterio técnico ni ninguna solicitud de por medio, es decir, fue completamente una decisión política conservadora. La justificación utilizada por el CSE fue bajo la excusa de elaborar un “programa nuevo” más adecuado y dirigido al grupo etario estudiantil.

Dicho programa fue presentado como alternativa bajo el nombre de “Programa de Educación para la Paz y Convivencia” donde si acaso se mencionan temas relacionados con afectividad y sexualidad. De los 85 contenidos que poseen solamente dos se refieren a la educación sexual, además, fueron

omitidas actualizaciones de años anteriores como la del 2017, en donde se amplía en cuanto a materia de género y métodos anticonceptivos.

Lo anterior no es coincidencia, ya que la propuesta por parte de la exministra Müller fue respaldada por la Conferencia Episcopal con respecto a la readecuación de los programas de educación sexual en el país; los obispos afirman lo siguiente “Es necesario que los programas educativos ofrezcan información objetiva y científicamente fundamentada, respetando las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, así como el desarrollo natural de los niños y jóvenes”. Sumado a lo anterior, el MEP eliminó el Protocolo de Atención de Bullying contra la población LGBT+ y también eliminó los reglamentos que permiten a las personas trans y no binaries el reconocimiento de su identidad de género. Esto refleja una clara intención de limitar espacios seguros para mujeres y diversidades, ya que las guías de educación sexual sirven como herramientas para que las personas menores de edad puedan



identificar situaciones de abuso donde peligren tanto su integridad como sus vidas. Es por eso que los sectores conservadores insisten tanto en eliminar estos programas, no quieren que mujeres y diversidades sean sujetas políticas y que tengan la capacidad de decidir sobre sus cuerpos, ya que quieren seguir violentando a través de la imposición de sus discursos de odio.

Cabe destacar que eliminar protocolos contra el bullying para personas de la comunidad LGBT+ en medio de un aumento de casos de bullying donde se han reportado casos graves en los centros educativos no es más que un ataque a dedo de las poblaciones más vulnerables llegando al punto en que se han dado abusos de índole sexual.

Basta de violencia misóniga ¡Por infancias libres de violencia!

Sobre esa misma línea, dentro de las formas de violencia que vienen en aumento se encuentra el abuso sexual infantil (ASI); la Caja el año pasado atendió 11.768 denuncias de ASI, dicha cifra tuvo un incremento del 51% en comparación con el 2022.

Lastimosamente, las denuncias en estos casos tienden a ser muy revictimizantes y dejan en impunidad a los agresores, ya que la principal causa de desestimación son las pruebas que poseen las víctimas las cuales en este tipo de casos suelen ser testimonios, aunque en la mayoría de los casos no hay acceso a las mismas

y aunque tengan pruebas evidentes, organismos como Poder Judicial no aplican las correspondientes medidas, ayudando a seguir perpetrando la violencia y los abusos.

Cabe destacar que, según datos del Estado de la Justicia entre el 2019 y el 2022, en la fiscalía de género el 66% de las denuncias fueron desestimadas y sólo en un 14% se solicitó la apertura de un juicio. Esto es una clara complicidad y negligencia de parte del Estado, dejando en impunidad a agresores sexuales y siendo el proceso de denuncia un completo martirio para las víctimas, ya que del porcentaje mínimo de casos que avanza a un juicio el 48% termina en absolutoria (dejan al victimario en libertad) y solamente el 32,8% termina en condena.

Esto va ligado con el conservadurismo social y la familia patriarcal que ayudan a sostener estos abusos, debido a que la mayor parte de ASI ocurren en círculos familiares o entornos cercanos a la víctima donde se recurre al silencio o a la vergüenza para no “dañar a la familia” y se toma como algo de lo que “no se debe hablar” o se debe de ocultar. El concepto de la familia dentro del ámbito burgués y como unidad básica del capitalismo y el patriarcado sirve para seguir sosteniendo y fomentando relaciones y círculos de violencia.

Peor aún cuando esto se mezcla con manipulación religiosa de por medio, como, por ejemplo, los múltiples casos de abuso sexual a menores de edad por



parte de Fabricio Alvarado, donde además del peso de su posición de poder, se le suma también el escarnio social donde se busca señalar y culpabilizar a las víctimas con cualquier excusa misógina: su forma de vestir, el lugar donde estaba, el momento en el cual pudo contar lo sucedido, entre muchas otras “razones”. Todas las anteriores son excusas patriarcales que buscan justificar y normalizar la violencia hacia las mujeres, las diversidades y las infancias; esto muestra la verdadera cara de quienes se proclaman como la “defensa de la familia y sus valores tradicionales”, que utilizan discursos de odio y la religión como ataques y “argumentos válidos” para eliminar los programas de educación sexual, ya que no les conviene que las poblaciones vulnerables tengan el acceso a la información desde temprana edad para conocer acerca de sus derechos, sus cuerpos, sus identidades y evitar o denunciar situaciones de violencia.

Es de recordar que los neopentecostales junto con el gobierno de Rodrigo Chaves se han encargado de dismantlar estos programas y dirigir ataques en torno al tema del aborto, ya que no quieren que mujeres, personas gestantes e infancias sean sujetos políticos que conquisten sus derechos, llegando a la bajeza de querer imponer sus políticas conservadoras obligándoles a parir y revictimizarles con tal de seguir teniendo el control sobre sus vidas y sus cuerpos.

Si usted o alguna persona en su entorno es sobreviviente de abuso u otro tipo de violencia y desea ser escuchada, o bien, denunciar, llame al 9-1-1, donde el personal del Centro Operativo de Atención a la Violencia Intrafamiliar le atenderá.

También, como estudiante, puede recurrir al CASE para ser escuchada.

DESDE ¡YA BASTA! PROPONEMOS

Alzar la voz por:

¡Ni una menos! El gobierno es responsable del incremento en la violencia

¡Aborto legal, seguro y gratuito! En defensa de la norma técnica

¡Aborto legal en el hospital!

Educación sexual laica, científica y feminista

¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir!

¡Cupo laboral y estudiantil trans!

¡Respeto a las identidades trans y no binaries!

¡Ni cis ni trans, ni una muerta más!

¡Por infancias libres de violencia!



LUCHAS DE DERECHOS HUMANOS Y LUCHAS ECOLOGISTAS





LUCHAS DE DERECHOS HUMANOS: VACÍOS INTERNOS EN LA UNIVERSIDAD

Falta de protocolos específicos de atención y actuación en los casos de bullying y discriminación

A pesar de contar con reglamentos que abordan el hostigamiento sexual y la discriminación en términos muy generales, no existen protocolos específicos que aborden de manera detallada y diferenciada las situaciones de bullying, discriminación hacia la comunidad indígena, ya que según la ONU “Los niños indígenas tienen más probabilidades de llegar a la escuela con hambre, enfermos y cansados; a menudo sufren acoso escolar, y el uso del castigo corporal sigue estando muy extendido”. Tampoco existen para personas LGBT+, según la UNESCO: “El acoso escolar homofóbico y transfóbico es un tipo específico de violencia escolar que se dirige hacia personas por su orientación sexual y/o identidad de género, percibida o real. Este tipo de acoso puede incluir burlas, esparcir rumores, humillación,

empujar, insultar, golpear, robar o destruir pertenencias, excluir de grupos, acosar vía internet, agresión sexual e incluso amenazas de muerte” y “la mayoría carece de apoyo de docentes y personal del centro, y son víctimas de bullying, acoso y aislamiento” o casos de racismo. La ausencia de protocolos específicos dificulta la identificación y abordaje adecuado de situaciones de violencia y discriminación, lo que puede llevar a una respuesta institucional inadecuada o tardía. La implementación de protocolos claros y específicos es esencial para garantizar un entorno educativo inclusivo, seguro y respetuoso para todas las personas.

Es urgente que la UCR desarrolle e implemente protocolos específicos que aborden de manera diferenciada las diversas formas de violencia y discriminación. Esto contribuirá a la construcción de una comunidad universitaria más equitativa y comprometida con los derechos humanos.



Falta de programas de apoyo hacia las comunidades indígenas y rebajo de cortes para su ingreso y permanencia en la Universidad

En Costa Rica, las comunidades indígenas han sido históricamente marginadas y precarizadas, lo cual justificaría la existencia de programas de apoyo hacia estas poblaciones, ya que son quienes cuentan con menos recursos educativos y económicos para subsidiar sus carreras o para interesarse en instituciones que no consideran sus realidades ni se ajustan a ellas.

Por lo tanto, se propone la implementación de programas de apoyo, como rebajo de notas de corte. Aunque existen programas de ayuda en la UCR para las personas indígenas, aun así no han sido suficientes, ya que no se realizan rebajos de cortes de admisión a las comunidades indígenas por lo que no se considera la falta de educación y deserción en esas zonas, lo cual limita su acceso y permanencia en la UCR, perpetuando desigualdades históricas.

Violación del derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas trans (transexuales y transgénero) en la Universidad de Costa Rica.

La Universidad de Costa Rica es un espacio que debe ser pluricultural

y diverso, donde estudian y trabajan múltiples personas pertenecientes a la población trans (entiéndase “trans” como cualquier persona que no se identifique con su sexo y género asignado al nacer y que ha realizado, está realizando o planea realizar una transición social, médica y/o quirúrgica para adecuar su realidad física y social con su realidad psíquica e identidad de género) [Corte IDH, 2017], por lo que es fundamental aplicar medidas específicas de protección contra las vulneraciones al reconocimiento de sus identidades como válidas.

Sin embargo, en la práctica, la UCR violenta constantemente el derecho al reconocimiento del nombre elegido en el caso de las personas que, por diversas razones, no han podido realizar su cambio en el Registro Civil (TSE), lo cual provoca incomodidades al momento de pasar la lista de asistencia, al aparecer nombres de nacimiento en los correos institucionales, a la confusión sobre el uso correcto de nombres y pronombres, y a la potencial depresión, ansiedad o angustia de la persona trans.

Considerando que la población trans es una de las más vulneradas socialmente, es entendible que, aunque las personas sean mayores de edad, opten por no cambiar aún su nombre, por temas familiares, donde Costa Rica ha sido testigo de múltiples violencias intrafamiliares hacia las personas trans al “salir del clóset” (expresar



abiertamente tener una orientación sexual no heterosexual o identidad de género no cisgénero] en entornos discriminatorios y transfóbicos, es decir, entornos donde las personas trans son vulneradas, odiadas, repudiadas o violentadas por el hecho de ser trans.

Falta de apoyo integral hacia la población estudiantil migrante, refugiada y exiliada

En la Universidad de Costa Rica es difícil saber cuántos estudiantes migrantes hay dentro de la institución, ya que no hay cifras oficiales, lo cual hace que sus experiencias y desafíos en la universidad no sean visibilizados. Al no tener información precisa, es complejo crear planes y proyectos que realmente respondan a sus necesidades.

Además, no hay medidas especiales para asegurar que los estudiantes migrantes, refugiados o exiliados puedan ingresar, permanecer y sentirse cómodos dentro de las clases en la universidad. A muchos se les dificulta el proceso de solicitud de beca porque no pueden entregar documentos oficiales como certificados de nacimiento de sus países. Un ejemplo frecuente son los nicaragüenses que se exiliaron en el país en el 2018 por la represión política de la dictadura Ortega-Murillo; no pudieron continuar sus estudios ni recibir becas porque les pedían papeles que su gobierno no

les emitía debido a que los consideran opositores.

La situación empeora porque la universidad no les da suficiente apoyo legal ni administrativo. El sistema de migración de Costa Rica solicita muchos trámites y permisos para estudiar, lo cual perjudica a quienes no tienen la guía necesaria para realizar estos procesos de la institución.

También, no existen residencias universitarias pensadas para madres migrantes, quienes no tienen acceso a residencias familiares donde puedan ejercer su maternidad y continuar con sus estudios. A diferencia de otras universidades, como el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la UCR no tiene un hogar o residencia familiar para ellas.

En cuanto al apoyo psicológico, hay casos de estudiantes migrantes, sobre todo después de la crisis sociopolítica en Nicaragua en el 2018, que buscaron ayuda, pero no la recibieron de la mejor manera. Aunque la Oficina de Bienestar y Salud (OBS) ofrecía opciones para acceder a servicios de salud mental a través de una lista de profesionales, este apoyo no llegó de manera efectiva a la población estudiantil migrante. La falta de apoyo psicológico y social representa una vulneración al derecho de la salud mental y el bienestar de los estudiantes migrantes en la universidad.

DESDE ¡YA BASTA! PROPONEMOS

Para la población trans:

1. Que la UCR permita el cambio de nombre dentro de la institución para el correo institucional, las listas de asistencia, carné estudiantil y demás procesos de importancia institucional, sin la necesidad de hacer el trámite de cambio de nombre en el Registro Civil, ya que este trámite puede poner en riesgo la seguridad de las personas trans que aún no pueden transicionar socialmente fuera de espacios seguros como la universidad.

2. Que desde la Oficina de Bienestar y Salud se habilite el acceso al tratamiento de hormonas.

Para la población migrante:

3. Que la FEUCR ponga sus recuerdos en disposición de realizar una investigación más en profundidad sobre las necesidades de la población estudiantil migrante en conjunto con su participación democrática.

4. Que se facilite el acceso al estudiantado migrante y en condición de refugio al derecho a becas, residencias estudiantiles y la casita infantil, sin la necesidad de presentar documentos que no les son accesibles por estar en condición de exilio o refugio político.

5. Que se brinde acompañamiento y asesoría legal a jóvenes y estudiantes que solicitan refugio para acceder a su derecho a la educación.



POR MÁS DERECHOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En el 2020 Semanario Universidad publicó un artículo titulado “Campus de la UCR todavía incumple con accesibilidad física” en el que se identifican al menos 30 puntos entre finca 1, 2 y 3 que categorizan como “físicamente inaccesibles para personas usuarias de silla de ruedas, con alguna dificultad de movilidad o personas ciegas”. Esto se debe a obstáculos en las aceras, baldosas guías y señalización incorrectas, rampas inexistentes o mal diseñadas, dificultades para la interpretación de LESCO, entre otros.

Las personas con discapacidad también sufren de desigualdades, inequidades y precarización en la U. El CASED y los CASE no cuentan con el personal necesario para atender las necesidades de la población estudiantil con discapacidades, que para 2022 representaba el 12% de la población estudiantil, según el Primer Perfil Universitario. Además, se plantea la necesidad de contratación personal con discapacidad en el CASED para que exista una sensibilidad real, y también la implementación de capacitaciones para el profesorado, ya que muchos tienden a ignorar las intervenciones del CASED. A nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2023 (Enadis) elaborada por el INEC,

se calcula que el 17,2% de la población adulta en el país presenta alguna discapacidad, lo que equivale a unas 676 mil personas. Además, la discapacidad afecta en mayor proporción a las mujeres que a los hombres: un 19,9% de las mujeres adultas frente a un 14,5% de los hombres. También se evidencia un incremento en la prevalencia de discapacidad conforme aumenta la edad, pues el 9,6% de las personas entre 18 y 35 años la presentan, mientras que entre quienes tienen 65 años o más la cifra asciende al 37,4%.

Otro aspecto relevante es el nivel de severidad de la discapacidad. Para el año 2023, se estima que el 71,6% de las personas adultas con discapacidad presenta una condición severa, lo que significa que, debido a las barreras existentes en los distintos entornos, enfrentan mayores dificultades para desenvolverse en sus actividades cotidianas. En contraste, el 28,4% tiene una discapacidad leve o moderada, correspondiente a quienes enfrentan menores limitaciones para realizar sus tareas diarias.

En cuanto al acceso a la educación, la Enadis señala que únicamente el 4,0% de la población con discapacidad severa participa en la educación formal, mientras que entre quienes tienen discapacidad leve o moderada



el porcentaje aumenta al 13,9%. Asimismo, el 62,4% de las personas con discapacidad severa no supera la educación primaria, cifra que desciende al 30,5% en el caso de la discapacidad leve o moderada. Estos datos reflejan una realidad preocupante, y puede explicarse observando que el 58,5% de los centros educativos a los que asiste esta población carece de condiciones adecuadas de accesibilidad, como rampas, pasillos amplios, puertas con manijas de palanca, ascensores, luces de alerta visual, alarmas sonoras, barras de apoyo o gradas con barandas.

Por si fuera poco, también se evidencia que el 86,7% de las personas con discapacidad que estudian no reciben apoyos relacionados con adecuaciones curriculares, pedagógicas o de acceso, tales como intérpretes de LESCO, teclados adaptados o acompañamiento profesional en psicopedagogía o tutorías. Como consecuencia, las personas con discapacidad acumulan, en promedio, dos años menos de escolaridad en comparación con la población sin discapacidad, 8,0 años frente a 10,1, y en el caso de las personas con discapacidad severa, el promedio es de 7,1 años cursados.

Esta misma situación se refleja en la educación superior. La Enadis reporta que solo el 18,3% de las personas con discapacidad logra acceder a estudios universitarios, en contraste con el 29,1% de las personas sin discapacidad. Esto se debe principalmente a la falta de apoyos, recursos de información

accesibles e infraestructura accesible, lo que limita su nivel educativo.

Finalmente, otros hallazgos relevantes del estudio indican que el 54,1% de las personas mayores de 18 años con discapacidad utiliza algún tipo de producto, servicio o animal de asistencia. Sin embargo, una cuarta parte de esta población (23,5%) afirma necesitar algún producto de apoyo para realizar sus actividades diarias, pero el 8,0% no utiliza ninguno y el 15,5% usa alguno pero necesita otro.

Asimismo, el 66,4% de las personas que requieren un producto o servicio de asistencia no lo tienen porque no pueden costearlo, el 15,4% indica que los trámites son lentos y el 18,2% menciona otras razones. Por último, se destaca que el 46,7% de las personas con discapacidad recibe ayuda personal para realizar actividades cotidianas, mientras que el 53,3% no cuenta con ningún tipo de asistencia.

Los datos proporcionados evidencian que a nivel país y a nivel universidad existen vacíos importantes en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad. La discapacidad no es individual, es social, el capitalismo la produce al valorar los cuerpos según su capacidad de generar ganancias. Quien no entra en su lógica de productividad es marginado, invisibilizado, descartado y por eso, luchar contra la exclusión también es luchar contra el sistema que la origina: uno que pone las ganancias privadas por encima de la vida y convierte la diferencia en motivo de opresión y exclusión.



POR MAYOR Y MEJOR ACCESO A LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL

La crisis de salud mental es una grave problemática en todas las sedes y recintos de la UCR, ocasionada por diversos factores como el estrés académico o que la beca no llegue a fin de mes. La atención psicológica oportuna, así como el apoyo social, son fundamentales para la mejora de la salud.

Dicha crisis se atiende con algunos mecanismos como el Protocolo ante Urgencias Psicológicas, este protocolo lo incluye rectoría en la resolución R-131-2024. Las instituciones universitarias que lo atienden son la Oficina de Bienestar y Salud (OBS), la Oficina de Orientación y más específicamente, desde los Centros de Asesoría Estudiantil (CASE).

No obstante, los protocolos y el personal psicológico son insuficientes para atender a todo el estudiantado, según una nota del Semanario Universidad (2024) La universidad sólo cuenta con 12 psicólogos para atender a 32.428 estudiantes en Facio. De esa cantidad de psicólogos, 8 trabajan en los CASE y 4 en la OBS. Esto es evidentemente insuficiente para cubrir toda la demanda.

Por lo cual termina generando tanto problemas para acceder a este derecho, como una sobrecarga laboral...

Cabe destacar que la OBS solo ofrece 12 sesiones de terapia para atender al estudiantado, lo cual es ciertamente insuficiente y debería ser basado en las necesidades de cada paciente.

El ritmo y las demandas académicas también han aumentado los niveles de estrés, ansiedad y agotamiento. La presión en la carga académica puede tener un impacto significativo, lo que lleva a cuestionar cómo se puede contribuir a un equilibrio saludable entre la presión académica y la vida personal. Es necesario realizar revisiones acordes en estas situaciones para mantener una relación coherente entre creditaje y dificultad, que se reconozca esta situación en aspectos educativos y de beca.

Desde la perspectiva anticapitalista que defendemos en ¡Ya Basta!, reconocemos el vínculo entre el modelo de producción capitalista y la salud mental. Esta no es una problemática individual, sino una responsabilidad social que desde nuestras acciones buscaremos trabajar.

DESDE ¡YA BASTA! PROPONEMOS

1) Exigir más presupuesto universitario para financiar mayor personal en psicología en todas las sedes y recintos, hacer campañas informativas y concientizar al respecto en todos los espacios de la U.

2) Eliminar el límite de sesiones de terapia impuestos por la OBS.

3) Fomentar espacios de socialización en toda la universidad (luchando contra el individualismo y la epidemia de soledad), ya que la falta de amistades o vínculos afectivos, sentirse en soledad y carecer de sentimiento de pertenencia repercute negativamente en la salud, de hecho, el sentimiento de soledad ya ha sido reconocido como una amenaza global a la salud por la OMS.

4) Una reducción en las cargas académicas extenuantes porque el estudiantado no es una máquina, el estudiantado no es una máquina y se debe priorizar el bienestar colectivo por sobre los trabajos universitarios.

5) Que en los cursos con altas tasas de personas reprobadas, no se afecte el ponderado, esto podría desencadenar una crisis nerviosa en la persona estudiante.



POR LA DEFENSA DE LA NATURALEZA FRENTE A LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA, POR UN ECOLOGISMO ANTICAPITALISTA

La vida humana no se puede comprender separada de la naturaleza, somos parte de ella y provenimos de los mismos procesos evolutivos que han dado vida a todas las especies. Sin embargo, el capitalismo llegó a romper la relación entre el trabajo, la humanidad y la naturaleza, cuestión que hoy se refleja en la profunda crisis climática que acrecienta las desigualdades.

En Costa Rica la conflictividad ambiental viene en aumento, el gobierno ha favorecido a empresarios como Pacheco Dent para facilitarle permisos de deforestación de bosques en el territorio de Gandoca-Manzanillo. O el caso en playa Panamá con el megaproyecto turístico

Bahía Papagayo, el cual es una amenaza directa “contra bosques, acuíferos y ecosistemas frágiles” y “ahora también es responsable de perseguir y amedrentar judicialmente a quienes denuncian sus impactos”.

El gobierno neoliberal y autoritario ha expresado su apoyo a retomar actividades extractivistas sumamente destructivas y contaminantes como la minería a cielo abierto en Crucitas o la exploración y explotación de petróleo y gas en el país, cuando el mundo debería caminar en otro rumbo, en la búsqueda, la inversión y desarrollo de energías sustentables, en función de las necesidades de las mayorías sociales y no del mercado, y por una transición energética sustentable.

Sumado a lo anterior, Chaves favorece el alto uso de agroquímicos en el país, bien sea beneficiando a los importadores de agroquímicos al mantener bajo el tipo de cambio o con la firma de la reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable que eleva los límites permitidos de residuos de plaguicidas en el agua destinada al consumo humano. Dicha reforma pone en riesgo la salud de las personas al permitir más concentraciones de sustancias



como el Clorotalonil que tiene un efecto cancerígeno y se ha encontrado en las aguas de la Zona Norte de Cartago.

De manera particular, las mujeres sufren en mayor medida las consecuencias de la devastación capitalista de la naturaleza, por ejemplo las migraciones climáticas se dan principalmente en mujeres que además tienen personas a cargo. Asimismo, la pobreza es una problemática ambiental, que se agudiza con el fenómeno de la feminización de la pobreza, lo que se expresa en limitaciones de acceso a los recursos ecológicos y en la vulnerabilidad ante desastres.

Ante la crisis ecológica mundial los capitalistas han intentado aparentar alguna preocupación, mediante poses como el “capitalismo verde” o el “desarrollo sostenible”, que solo buscan garantizar la “sostenibilidad” de sus ganancias en un mayor periodo de tiempo, tomando medidas blandas que no resuelven el problema de fondo. Desde nuestro punto de vista, es imposible que el capitalismo asuma criterios de producción ecológicos, porque atentaría contra su forma específica de relacionarse con la naturaleza, donde priman los intereses del capital y no los de la humanidad ni la naturaleza.

Todos estos son ejemplos de la relación depredadora del capitalismo con el ambiente natural. Como estudiantes y universidad debemos tomar cartas en el asunto, y desde ¡Ya Basta! queremos aportar con propuestas y debates sobre este acuciante problema.

DESDE ¡YA BASTA! PROPONEMOS

1. Alto a la destrucción de los bosques, humedales y ecosistemas por la expansión de la industria turística que expolia a las comunidades costeras.

2. Por el acceso al agua potable para consumo humano como prioridad sobre las ganancias de las empresas. No más fuentes de agua contaminadas con agrotóxicos. Por la prohibición del glifosato, el paraquat y otros agrotóxicos.

3. No a la minería a cielo abierto en Crucitas que pretende revivir este gobierno expoliador de la naturaleza. Que se protejan los bosques y oposición a la intención de explotación minera en Corcovado.

4. Por impuestos directos a la importación de granos básicos, contra la ruta del arroz, y por el fortalecimiento de la producción local del grano. Para financiar educación e inversión en acueductos y alcantarillados.

5. No a la exploración y explotación de petróleo y gas natural en Costa Rica.

6. Nos oponemos a la privatización del ICE.

7. Oposición a la expansión piñera en el país, mucha de esta expansión se da en áreas silvestres protegidas.

8. Apoyamos la lucha de recuperaciones de tierras indígenas y luchar por justicia para Sergio Rojas y Jehry Rivera asesinados por los terratenientes usurpadores de tierras que son legítimamente de los pueblos indígenas.

9. Que el movimiento estudiantil impulse la construcción de un movimiento ecologista combativo, independiente del gobierno, la Asamblea Legislativa y el empresariado, que luche en las calles y retome su papel de lucha en las calles.

Referencias Bibliográficas:

13. <https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/criterios/5988-mas-alla-del-comercio-el-potencial-del-tlc-entre-costa-rica-e-israel>
14. <https://surcosdigital.com/convenios-de-universidades-publicas-de-costa-rica-con-el-estado-ilegitimo-y-genocida-de-israel/>
15. <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2023/4/23/costa-rica-esta-varada-en-un-sistema-de-transporte-publico-obsoleto.html>
16. <https://www.larepublica.net/noticia/transporte-publico-en-costa-rica-una-crisis-estructural-que-exige-una-respuesta-inmediata>
17. <https://www.nacion.com/opinion/editorial/editorial-es-hora-de-declarar-emergencia-nacional/UJGNLUGGKNDO3GUZN4RXOZHICA/story/>
18. <https://www.nacion.com/opinion/editorial/editorial-mas-y-mas-rutas-de-buses-suspenden/BVICY4KLF5ER5EXX3TPDM2BEEE/story/>
19. https://www.teletica.com/nacional/costa-rica-necesita-1500-choferes-de-autobus-pero-no-logra-conseguirlos_393169
20. <https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2024/informe-2024-675a145d9d537.pdf>
21. <https://www.ucr.ac.cr/acerca-u/campus/bus-externo.html>
22. <https://izquierdaweber.com/index.php/2025/08/23/las-conquistas-de-la-reforma-de-cordoba-de-1918/>
23. <https://izquierdaweber.com/index.php/2025/08/04/sobre-la-reforma-universitaria-de-cordoba-1918-y-la-democratizacion-universitaria/>
24. Las Rojas, “Repudiamos el ataque de Chaves contra el aborto terapéutico,” Izquierda Web CR, 3 de octubre de 2025, <https://izquierdaweber.com/index.php/2025/10/03/repudiamos-el-ataque-de-chaves-contra-el-aborto-terapeutico/>
25. Natalia Hidalgo Cerdas, “Debate con Ariel Robles: ‘el aborto legal no es una discusión actual,’” Izquierda Web CR, 11 de septiembre de 2025, <https://izquierdaweber.com/index.php/2025/09/11/debate-con-ariel-robles-el-aborto-legal-no-es-una-discusion-actual/>
26. Consejo Nacional de Rectores (Costa Rica), Programa Estado de la Nación. Décimo Estado de la Educación 2025. San José: CONARE-PEN, 2025. p.45.
27. El Mundo CR. (2025, enero 25). Conferencia Episcopal respalda decisión de ministra de Educación de readecuar programas de educación sexual. El Mundo CR. <https://elmundo.cr/costa-rica/conferencia-episcopal-respalda-decision-de-ministra-de-educacion-de-readecuar-programas-de-educacion-sexual>
28. Castillo, E. (2025, 7 de octubre). Ya son dos las denuncias contra Fabricio Alvarado por abuso sexual. Izquierda Web CR. <https://izquierdaweber.com/index.php/2025/10/07/ya-son-dos-las-denuncias-contra-fabricio-alvarado-por-abuso-sexual>
29. Murillo, J. A. (2025, 11 de junio). Solo 14 % de denuncias por violencia contra mujeres llegan a juicio y mitad terminan en absolutoria. CR Hoy. <https://www.crhoy.com/solo-14-de-denuncias-por-violencia-contra-mujeres-llegan-a-juicio-y-mitad-terminan-en-absolutoria>
30. Universidad de Costa Rica, Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual (s.f.), <https://www.ucr.ac.cr/comision-institucional-contra-el-hostigamiento-sexual/>
31. Organización de las Naciones Unidas, Pueblos Indígenas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (s.f.), <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/mandated-areas1/education.html>
32. UNESCO, ¡Alto al acoso! Apoyemos a las juventudes LGBTIQ (2020), <https://www.unesco.org/es/articulos/alto-al-acoso-apoyemos-las-juventudes-lgbtq>
33. Viviana Solano, Flor Alvarado y Melissa Obando, “Racismo y manifestaciones discriminatorias hacia pueblos indígenas y otras poblaciones étnico-culturales en Costa Rica,” Revista Espiga 23, no. 48 (2024), <https://revistas.uned.ac.cr/index.php/espiga/article/view/5583>
34. Organización de las Naciones Unidas, “Los líderes indígenas de Costa Rica sufren ataques que quedan impunes,” Noticias ONU, 26 de junio de 2020, <https://news.un.org/es/story/2020/06/1475622>
35. Organización de las Naciones Unidas, Pueblos Indígenas (s.f.), <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/mandated-areas1/education.html>
36. Universidad de Costa Rica, “UCR logra aumentar matrícula de estudiantes indígenas,” Noticias UCR, 6 de septiembre de 2017, <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2017/09/06/ucr-logra-aumentar-matricula-de-estudiantes-indigenas.html>

37. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-24/17 sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo (2017), https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

38. Pomareda García, Fabiola. [2024]. “No es conveniente que grupos privados se metan en el negocio de la distribución de la electricidad”. Semanario Universidad. En: <https://semanariouniversidad.com/pais/no-es-conveniente-que-grupos-privados-se-metan-en-el-negocio-de-la-distribucion-de-la-electricidad/>

Otras notas:

I <https://semanariouniversidad.com/universitarias/recortes-al-fees-y-regla-fiscal-impiden-a-la-ucr-desarrollo-de-245-proyectos-de-infraestructura/>

II <https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2024/informe-2024-675a145d9d537.pdf#page=218.10> [pp. 269-270]

III <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2022/8/22/programa-de-residencias-estudiantiles-cuando-la-universidad-se-convierte-en-un-segundo-hogar.html>



**POR BECAS AJUSTADAS
AL COSTO DE VIDA**



**POR ABORTO
LEGAL, SEGURO Y GRATUITO**

**Juventud
Anticapitalista**

**Si ya lo leíste, sabés que la
salida es con la izquierda
anticapitalista**